

Mario Roberto Solarte

Colombia: simetrías violentas y alternativas que emergen de la memoria

Mario Roberto Solarte Rodríguez es doctor en Filosofía y profesor asociado de la Facultad de Filosofía, de la cual es actualmente director de Departamento, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), donde es profesor de seminarios de filosofía social y coordinador de la práctica social de los estudiantes en colaboración con el Servicio Jesuita a Refugiados. Participa como animador y facilitador del Movimiento Ciudadano por la Noviolencia, con especial hincapié en procesos de organización y empoderamiento comunitario de personas y comunidades víctimas de la violencia, así como en formación en derechos humanos y noviolencia. Igualmente, colabora con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP-Programa por la Paz) en procesos de acompañamiento, formación y organización de víctimas de la violencia, y en formación política y ciudadana. Fue durante diez años coordinador del Programa de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Este trabajo pretende servir de orientación para comprender la actual situación de Colombia, un complejo escenario que se analiza de acuerdo con las categorías de «estado de violencia», «rivales simétricos» y «memoria». Las dos primeras categorías permiten trazar una imagen de Colombia desde la doble perspectiva de sus principales actores de violencia, el Gobierno y la guerrilla de las FARC, a la vez que exponer los efectos sobre las personas de este estado de violencia mantenido por la lucha contra el terrorismo y contra la oligarquía, con la omnipresente y erosiva porosidad de las mafias del narcotráfico. La memoria permite mostrar un horizonte de esperanza en una paz construida no «contra», ni con los recursos de las armas, sino con la sabiduría de las diversas tradiciones y de las esperanzas durante tantos años acumuladas.¹

ÍNDICE

1. Unos datos básicos sobre Colombia	1
2. La globalización como macrocontexto de lo que sucede en Colombia	2
3. Colombia en el contexto regional	6
4. El proyecto de seguridad	8
5. La seguridad democrática como estado de violencia	9
6. La confianza inversionista como empobrecimiento de las mayorías	10
7. La cohesión social como unanimidad	12
8. La lucha por la paz desde la guerrilla	12
9. El recurso a la memoria como alternativa	13
Notas	15
Bibliografía	16

1 Unos datos básicos sobre Colombia

Colombia es un país situado al norte de Suramérica, entre el océano Pacífico y el mar Caribe. Tiene tres cadenas de montañas y dos valles surcados por largos ríos; el 60% de su territorio son selvas ubicadas en la costa pacífica y la Amazonía. Esta realidad geográfica ha dificultado el poblamiento y las comunicaciones, de manera que las principales ciudades se hallan en valles en zonas relativamente altas de las montañas, o en puertos en el Caribe (véase el mapa 1). En el orden político, se ha debatido mucho sobre el tipo de Estado que se ha formado en Colombia, si es un Estado fragmentado, uno fallido o simplemente uno precario, todo esto debido a la confusión entre lo público y lo privado, a las dificultades para articular lo local con lo nacional y a las defi-

ciencias para prestar de manera impersonal los servicios básicos que garantizan los derechos a los ciudadanos (González, 1999: 8-10).

Colombia vive una situación de conflicto interno de alta intensidad que durante cuarenta y cinco años ha enfrentado al Gobierno con guerrillas de izquierda. La negociación con varios grupos guerrilleros a finales de los años ochenta impulsó una nueva Constitución (1991), que contiene las bases para un Estado social de derecho. En esa misma época se consolidó el poder de los carteles de la droga, los cuales dieron origen a grupos paramilitares, una solución tradicional en un Estado no consolidado, a la que contribuyeron militares, empresarios, políticos y actores extranjeros. Esto hizo que la última década del siglo XX terminara con una tremenda violencia, llevando las cifras de muertos a cerca de 30.000 personas al año.

Se trata entonces de un estado paradójico que conjuga, según Kruijt y Koonings (2008), una inestabilidad estable y una estabilidad inestable. La razón de esta situación paradójica es que, por un lado, existe una institucionalidad democrática reguladora que funciona en una buena parte del territorio. Las instituciones públicas, la sociedad civil y los medios de comunicación son relativamente sólidos. Por ejemplo, Colombia cuenta con algunas de las mejores universidades de la región. Las principales ciudades disponen de buenas dotaciones en materia de infraestructura, transporte público, educación, salud y seguridad pública. La fuerza pública está subordinada a las autoridades civiles. El poder judicial ha sido capaz de reforzar su independencia y efectividad en los años recientes. Colombia destaca por su estabilidad macroeconómica, y cuenta con políticas económicas prudentes, aunque no ha logrado mejorar el empleo formal con salarios que permitan a las familias vivir decentemente. Su sociedad es mayoritariamente urbana y ha consolidado una pequeña clase media con estilo de vida y valores globalizados. Pero, por otro lado, se trata del país que es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo y que sufre las consecuencias de un conflicto armado interno cada vez más confundido con las luchas de las mafias. Debido a la violencia permanente, cientos de miles de personas han perdido la vida, y entre 1,9 millones y 4 millones han sido desplazadas en los últimos diez años. La emigración, a su vez, ha aumentado notablemente: según cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones del año 2007, alrededor de 3,6

millones de colombianos han salido del país. Además, los programas sociales del Gobierno no son aún capaces de revertir la pobreza general y la desigualdad, que es estructural (véanse los cuadros 1 y 2). En la actualidad, cerca de 24 millones de colombianos son pobres, de los cuales 8 millones viven en la miseria (Kruijt y Koonings, 2008).

La globalización como macrocontexto de lo que sucede en Colombia



En este apartado se sitúa a Colombia en el contexto de la globalización, que será deconstruida en su significado.

Más allá de los cambios económicos o comunicativos, la globalización es una novedad en cuanto sistema que se predica a sí mismo como único, una totalidad cerrada que renuncia a cualquier afuera o más allá, aunque como sistema social contenga la violencia, expresada tanto por su organización formal (mitos, ritos, prohibiciones) como por su referencia intrínseca a algo externo (Solarte, 1999). El afuera que ya no se considera es el lugar de existencia de los otros, quienes permiten construir las nuevas identidades; con la globalización, esos «otros» están entre «nosotros», sin que medien barreras políticas, sociales o culturales, y sin que existan ahora barreras espaciales. Paul Dumouchel (2008-2009: 174-175) recuerda que esta presencia de los otros entre nosotros se suele emplear en referencia a los migrantes, los trabajadores extranjeros y los refugiados, y desde Colombia añadimos a los millones de víctimas del desplazamiento forzado y de refugiados y emigrantes que produce el conflicto de este país. Mientras las ciudades del primer mundo se llenan de personas de todos los orígenes y nacionalidades, generando minorías visibles, las ciudades colombianas han sido invadidas por millones de personas que han sido despojadas de sus tierras y huyen de una guerra de la cual no se sienten parte.

El problema del territorio se vuelve, entonces, la señal más visible de la globalización: lo que se pone en entredicho es la experiencia del territorio nacional y de las divisiones

Cuadro 1 Algunos datos sobre Colombia

Área: 1.141.748 km².
Costas: 3.208 kilómetros.
Límites: al norte, el mar Caribe; al este, Venezuela y Brasil; al sur, Perú y Ecuador; al oeste, el océano Pacífico; al noroeste, Panamá.
División política: 32 departamentos.
Capital: Bogotá, D. C. (fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada).
Unidad monetaria: peso colombiano.
Índice de Desarrollo Humano (2007): 0,807.*
Esperanza de vida al nacer (2007): 72,7.
Tasa de alfabetización de adultos: 92,7%.
PIB per cápita: 8.587 dólares.
Coefficiente de Gini (2009): 0,585.**

* Según las Naciones Unidas, Colombia ocupa el puesto 77 entre 182 Estados (http://hdrstats.undp.org/es/countries/country_fact_sheets/cty_fs_COL.html).

** El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de la sociedad, bajó en promedio en Latinoamérica un 5% entre el año 2002 y el 2007. Colombia había logrado reducir este indicador, pero en los últimos siete años, la desigualdad se ha vuelto a incrementar; así, el coeficiente de Gini para Colombia en el año 2009 es de 0,585, constituyéndose como el país más desigual de la región.

Fuente <<http://www.colombiaespasion.com/es/asi-es-colombia/26-colombia-en-cifras/284-superficie-y-poblacion.html>> y Human Development Report 2009 (http://hdrstats.undp.org/es/countries/country_fact_sheets/cty_fs_COL.html); <http://hdrstats.undp.org/en/indicators/161.html>).

Cuadro 2 Población y territorio en Colombia

Hay datos poco claros con respecto a la población colombiana. Según el Gobierno, en el año 2009 había en Colombia 44.977.758 habitantes, pero las agencias de cooperación internacionales calculan la población colombiana entre 43.700.000 y 46.000.000 habitantes. El 33,23% son hombres adultos, el 35,95% mujeres adultas, y el 30,73% menores de edad.

El 74% de la población colombiana vive en el área urbana y el 26% en el área rural. En Colombia las mujeres constituyen el 52% de la población (54% en zona urbana y 49% en zona rural). De los 1.050 municipios de Colombia, cerca de 950 tienen poblaciones «urbanas» menores de 5.000 habitantes, esto es, menos que un barrio de Bogotá. Sólo 85 ciudades superan los 100.000 habitantes. Pero, más allá de las cifras demográficas, la base económica de todos esos centros «urbanos» son las actividades primarias de tipo rural. Se estima que el 52% de la población colombiana reside en territorios dependientes de actividades primarias.

Se calcula que cerca de 5,5 millones de hectáreas han sido ocupadas por grupos paramilitares, desplazando a sus dueños legítimos. Según datos de diciembre del 2009, en dos décadas se han decomisado a narcotraficantes 6.968 predios con una extensión de 789.000 hectáreas; a los grupos paramilitares sólo se les han confiscado 21.481 hectáreas, cuando varios estudios muestran, como ya se ha mencionado, que por lo menos se apropiaron de cinco millones y medio de hectáreas, que han sido abandonadas o usurpadas por los distintos actores del conflicto. La Fiscalía General de la Nación y los jueces especializados han devuelto la tercera parte de los predios a los narcotraficantes y paramilitares a quienes se los decomisaron. El Estado ha pagado 90.000 millones de pesos para comprar 60.000 hectáreas en programas en beneficio de las familias campesinas desplazadas, pero fracasó en el intento de atender las necesidades de 385.000 familias campesinas que fueron despojadas de sus tierras y a las que sólo se les han asignado 15.000 hectáreas (según un estudio del Departamento Nacional de Planeación). Y, por el contrario, ha instrumentado programas polémicos, como aquel en el que se entregó a ingenios del Valle del Cauca 9.034 hectáreas para su explotación.

En el censo realizado por el Gobierno en el año 2005, el 10% de la población colombiana se reconoció como negra, afrocolombiana, palenquera o raizal; el 3,3% de la población se reconoció como indígena.

Fuente Departamento Nacional de Estadística, *Colombia: estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad*; Rafael Echeverri, *Mitos en torno al medio rural colombiano* (<http://www.misionrural.net/documentos>); *Hechos del Callejón*, 47 (junio 2009); «La contrarreforma», *Semana*, 05/12/09 (<http://www.semana.com/noticias-nacion/contrarreforma/132291.aspx>); Fisas (2009).

internacionales basadas en territorios exclusivos. El territorio es una forma de organización social y política, que constituía la forma corriente de vida, cuya imagen no podemos imaginar como inexistente. Como su erosión es gradual y lenta, no tenemos mucha conciencia de su colapso. Para el moderno Estado nacional el territorio es un espacio continuo, con partes contiguas, que pertenecen a un todo y que son esencialmente semejantes (isomórficas) por cuanto cada una es tan parte del Estado como otra; además, el territorio es exclusivo, pues los Estados nacionales se excluyen mutuamente. Esto se extiende a la pretensión de legitimidad del Estado nacional sobre el territorio, lo que se traduce en el monopolio legítimo de la violencia, mostrando que el poder se ejerce sin rupturas; este poder no sólo es supremo en un territorio, pues ningún otro poder lo puede disputar, sino que es soberano. Por eso, los poderes locales se ejercen bajo la legitimidad del poder del Estado nacional. La igualdad formal entre los ciudadanos es el equivalente político del isomorfismo entre las partes del Estado, pues cada ciudadano tiene el mismo valor en sentido formal. Esta formalidad se va haciendo real a partir de las relaciones de pertenencia. La pertenencia es, en primer lugar, legal y toma la forma de la ciudadanía: una característica política que suele referirse al lugar en el que se nace. Pero la pertenencia no se restringe a lo legal, sino que se remite a los vínculos culturales; estos vínculos suelen ampliar el sentido de pertenencia espacial, para incluir en la ciudadanía a extranjeros que hablan la misma lengua o pertenecen al mismo grupo étnico o nacional. De manera inversa, quienes viven en el mismo territorio se supone que comparten la misma cultura, entendida en sus límites territoriales. Y esto puede explicar las dificultades experimentadas con las minorías, que van desde la desconfianza hasta la persecución y la expulsión. La misma reacción contra las minorías étnicas puede verse en diferentes experiencias históricas en que el poder del Estado nacional se aplica a la homogeneización a través de políticas de asimilación, educación y represión de las diferencias étnicas. Esto ha ocurrido en muchos lugares, porque la población de los Estados nacionales no era al comienzo homogénea, sino que fue hecha homogénea a través de políticas de asimilación. Pero,

al igual que la igualdad, la homogeneidad es una ficción, pues los ciudadanos son en muchos sentidos diferentes; en ambos casos, son las decisiones políticas las que definen cómo se entienden la igualdad y la homogeneidad (Dumouchel, 2008-2009: 176-178).

Como los Estados nacionales se definen por sus límites, se trata de entidades reconocidas internacionalmente; las instancias supranacionales parten de reconocer la existencia de una pluralidad de territorios mutuamente excluyentes. Esos límites definen espacios de ejercicio del poder soberano, de modo que este orden de los territorios implica la existencia de una pluralidad de Estados que son formalmente iguales por cuanto cada uno reconoce la soberanía exclusiva de los otros sobre cierta porción de espacio. Estos Estados territoriales existen sólo por cuanto son reconocidos por otros (Hegel, 1993: 321-340). Fuera del territorio de un Estado, existe otro Estado que tiene sus mismas características; así, el territorio estatal es una especie de santuario moderno, que garantiza derechos a los ciudadanos dentro de sus límites espaciales. Fuera de los límites espaciales o conceptuales del Estado, queda la barbarie, el ámbito del enemigo, según la caracterización ofrecida por Carl Schmitt (1932): el enemigo «es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles». Los enemigos son aquellos con quienes los conflictos no se pueden resolver a través de reglas comunes ni de mediaciones de árbitros; pero estos enemigos suelen coincidir con los que viven fuera de las propias fronteras, de modo que el monopolio legítimo de la violencia y la imposición del imperio de la ley constituye sólo uno de los aspectos que resultan de la expulsión de los enemigos fuera de las fronteras del Estado. La justicia social añade otra dimensión a la exigencia de la igualdad, una que está basada en la solidaridad entre quienes viven juntos y que constituye la cohesión social. Después del fin de la segunda guerra mundial, el Estado de bienestar se orientó a prevenir la aparición de enemigos dentro del Estado, de manera que la justicia social ha garantizado que no existan enemigos internos y que el Estado pueda sostener su mono-

polio legítimo de la violencia. La justicia social ha sido garante de un aspecto central del orden territorial: la ausencia de enemigos internos en el espacio de ejercicio de poder del Estado nacional.

Esta relación entre la justicia social y el Estado de bienestar es de reciprocidad indirecta. Se trata de una reciprocidad indirecta porque no se realiza directamente entre los sujetos, sino a través de las operaciones de centros que redistribuyen recursos. Y es indirecta porque es una reciprocidad diferida: la reciprocidad es la correspondencia mutua de una persona con otra, ya sea para dar o para recibir; pero en el Estado de bienestar se trata de una relación impersonal e imparcial que redistribuye los bienes sociales. Así, esta reciprocidad indirecta y diferida es una especie de promesa, y el Estado moderno su guardián en nombre de los ciudadanos (Dumouchel, 2008-2009: 179).

Si los «enemigos» viven entre nosotros, esto quiere decir que no podemos estar seguros de que el espacio en que vivimos esté libre de individuos o grupos que sienten que pueden recurrir de manera legítima a la violencia. En el contexto posterior al 11 de septiembre del 2001, se emplea la imagen de «terroristas» para dibujar una semblanza de esa amenaza permanente de un mundo total que, al perder los límites, se ha vuelto apocalíptico. El apocalipsis es la imaginación final de una última amenaza representada por la universalización de la violencia, debido a que el enemigo vive entre nosotros. Así, la globalización es el advenimiento de una era de reciprocidad violenta entre antagonistas, que recuerda la visión de la política de Schmitt (1932): «La diferenciación específicamente política, con la cual se pueden relacionar los actos y las motivaciones políticas, es la diferenciación entre el *amigo* y el *enemigo*». Ante este universo apocalíptico, donde imaginamos que se ha impuesto un caos destructivo, se puede elegir presionar esa imaginación apocalíptica para producir víctimas entre los enemigos, o reconocer que ese enemigo no es más que otro simétrico, otro como yo, con el cual no tiene sentido ejercer violencia (Hamerton-Kelly, 2007).

La guerra contra el terrorismo es un signo de la desaparición de ese orden territorial: la desaparición del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, y de las guerras convencionales. Las guerras eran entre Estados soberanos; si se trataba de guerras civiles, chocaban facciones con pretensiones del uso legítimo de la violencia. Estas guerras convencionales tenían un comienzo y un fin; producían ganadores y perdedores, y cuando la guerra terminaba, retornaba la paz. Lo que ha sustituido a la guerra convencional es un estado permanente de violencia, que se manifiesta en la reducción de conflictos entre naciones y el incremento de conflictos dentro de los Estados, con hostilidades que tienden a extenderse indefinidamente; no es siempre una decisión del Estado la que desata la violencia, de modo que no hay propiamente guerra, sino un *estado permanente de violencia*, que no tiene fin.

Lo que ocurre en lugares como Colombia² no es propiamente una guerra contra otro Estado ni una guerra civil, sino que la violencia se ha vuelto un modo de existencia en regiones enteras del país. Los estados de violencia no afectan a toda la sociedad, sino que están confinados a partes del territorio; fuera de esas zonas de violencia, la vida es relativamente normal. Dumouchel (2008-2009: 181) sostiene la siguiente argumentación acerca de países como Colombia, Palestina, Irak, Afganistán, Somalia y la República Democrática del Congo:

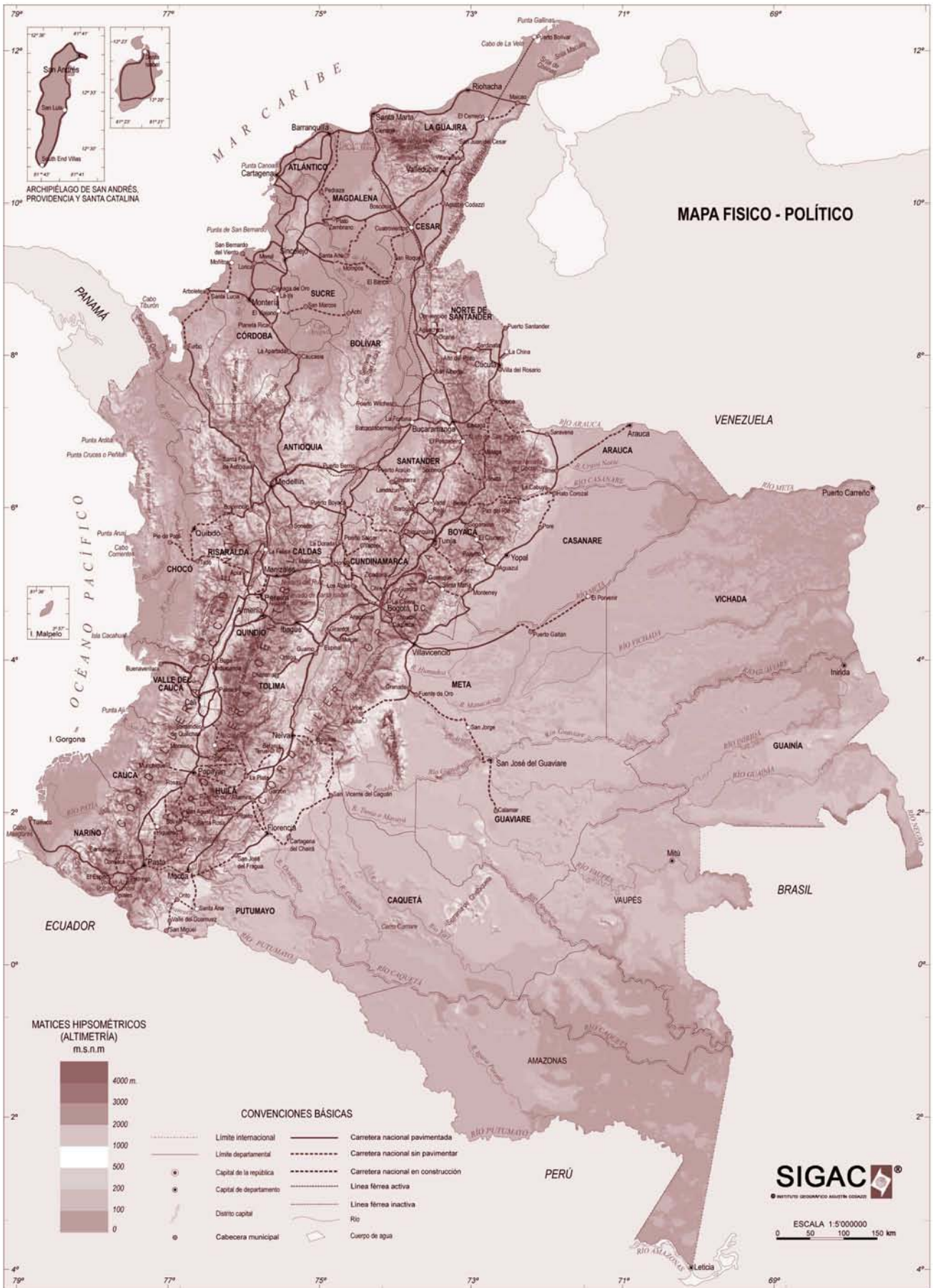
Esos enclaves de violencia algunas veces tienen un papel de importancia económica o un valor estratégico, y muchos tipos de actores participan en las relaciones de hostilidad que los caracterizan: las tropas del gobierno (y las unidades paramilitares más o menos oficiales), fuerzas rebeldes, empresas de seguridad privada, señores de la guerra locales, combatientes tribales, tropas de países vecinos y miembros de fuerzas de paz

internacionales. Esta lista incompleta deja fuera dos importantes rasgos de los estados de violencia. Primero, está su internacionalización: muy raramente están los participantes, las partes en conflicto, limitadas a los ciudadanos de un solo Estado. La mayoría de las veces son los extranjeros quienes tienen un papel importante en la evolución y prolongamiento de la lucha. Segundo, está la presencia de actores no estatales, tropas rebeldes, claro está, pero también empresas privadas de seguridad, corporaciones que las contratan, y el crimen organizado. De hecho, con frecuencia es difícil distinguir entre conflicto político y actividades criminales a gran escala, pues los insurgentes se orientan hacia varias actividades ilegales para consolidar sus operaciones. Cuando esto sucede, el ganar suele dejar de ser el objetivo. La lucha misma se convierte en una forma de empresa económica. La violencia significa el monopolio, por ejemplo, de las ganancias de la producción de la droga. [...] Así el conflicto se integra en la economía mundial. Simultáneamente, esta lucha localizada, mientras no se descontrola, puede servir a los objetivos de ciertos grupos dentro del Estado y ayudarles a mantenerse aferrados al poder.

El estado de violencia pone al descubierto la decreciente capacidad del Estado para mantener el monopolio de la fuerza y aplicar democráticamente el Estado de derecho; la globalización ha socavado estas capacidades en los Estados. Esto se puede apreciar en el tráfico de sustancias psicoactivas, que es transnacional. Las organizaciones criminales, los grupos insurgentes y las élites corruptas están interesadas en mantener un Estado frágil para poder cubrir sus actividades ilegales y negociar su posición en el sistema internacional. Por consiguiente, los vínculos entre las economías ilegales, la corrupción y la fragilidad del Estado se han convertido en un círculo vicioso, en el cual un estado permanente de violencia convierte a la sociedad en aún más vulnerable debido a las relaciones entre las autoridades públicas, los grupos insurgentes y el crimen organizado (Durán, 2007).

El estado de violencia que define a países como Colombia no es una anomalía dentro del sistema global. Más bien representa la nueva cara del orden mundial. La expresión «guerra contra el terrorismo» indica que los grandes poderes del mundo han aceptado la transformación de la escena internacional. Pero al declarar la guerra contra el terrorismo no se está creando ninguna desventaja ni asumiendo ninguna responsabilidad. Por ejemplo, los Gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia no reconocen a los «terroristas» como enemigos de combate y no extienden a ellos la Convención de Ginebra;³ en consecuencia, ambos Estados han rehusado estar obligados por las reglas del derecho internacional con respecto a los terroristas. Si el Gobierno de los Estados Unidos ha secuestrado personas en varios países y las ha llevado a otros donde las ha torturado, el Gobierno de Colombia no ha dudado en bombardear un campamento de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el norte de Ecuador. Así, los Estados que luchan contra el terrorismo usan para su provecho diversas clases de reglas;⁴ del mismo modo proceden las empresas multinacionales que sacan provecho de la diversidad de leyes de los diversos países. Eso lo hace cualquier Estado que tiene el poder de actuar fuera de sus fronteras y considera que tiene razones para hacerlo. Es decir, la guerra contra el terrorismo no reconoce la estructura de la comunidad internacional, basada en Estados separados por fronteras definidas. El espacio en que libra esta guerra no son los territorios de los Estados. Así, la lógica de esta guerra ya no es la de los Estados entendidos en su extensión dentro de fronteras, sino la lógica de los lugares o zonas. Esta lógica divide al mundo entre zonas calientes de violencia y zonas frías de paz y orden. El fin de la guerra contra el terrorismo no es llevar la paz a las zonas

Mapa 1 *Mapa físico-político de Colombia*



calientes, sino mantener ciertas áreas como santuarios que están protegidos de la violencia.

Esta organización de los espacios entre santuarios y áreas exteriores a ellos tiene una calidad fractal, pues el espacio en que vivimos ahora tiene el mismo tipo de estructura a diferentes niveles, de modo que podemos comprenderlo tanto en términos de distancia física como de proximidad social y cultural. Los ejemplos de estos santuarios se multiplican, y pueden contenerse unos en otros: la zona verde de Bagdad o Somalilandia son islas de paz en medio de agudos conflictos; las estrictas medidas de seguridad que los países del primer mundo aplican a los inmigrantes en los aeropuertos son casi idénticas a aquellas a las que someten a sus propios ciudadanos que pretenden tomar un avión; el muro que construyó Israel para defenderse de los suicidas palestinos se asemeja a los cientos de kilómetros de alambra que los Estados Unidos han puesto en su frontera con México con la esperanza de mantener fuera a los inmigrantes ilegales. Y la imagen de los muros se repite: las casas con muros y guardias de seguridad en medio de ciudades técnicamente seguras, los conjuntos residenciales, las empresas o las universidades donde la entrada es restringida. Éste ya no es el orden territorial, pues no hay espacios continuos ni isotrópicos, sino que ahora estos santuarios pueden estar contenidos unos en otros. Los límites de estos santuarios de paz no son fronteras en el sentido de líneas imaginarias que existen gracias a los actos de reconocimiento mutuo entre los Estados, pues no hay ningún acuerdo ni tratado internacional que defina los límites ni lo que deben ser estos ámbitos de paz, sino la imagen de lo que debe ser la fuerza de los adversarios. De hecho, todas estas medidas de seguridad existen porque las fronteras ya no funcionan.⁵ Como los enemigos no se pueden identificar por ser otros, que vienen de fuera y tienen otros pasaportes, las fronteras no resultan adecuadas para mantenerlos fuera.

La desaparición de las fronteras va paralela a la desaparición de la igualdad que caracteriza el orden territorial. Cuando los otros no son nosotros, el orden que regula la vida y garantiza nuestra seguridad se mantiene claro. Pero si los enemigos están ocultos entre nosotros, en cualquier lugar, y cualquiera puede ser nuestro enemigo, entonces el imperio de la ley puede ser suspendido arbitrariamente en cualquier momento y lugar para enfrentarse a cualquier individuo, el cual, mientras se mantuvo oculto, era exactamente como cualquiera y nada lo diferenciaba de nosotros. Al contrario de lo que ocurre con los criminales, los «terroristas» no son procesados presuponiendo su inocencia, sino que deben ser detenidos de manera preventiva antes de que actúen contra nosotros. No son sus actos los que los hacen nuestros enemigos, sino las oscuras intenciones que albergan contra nosotros. Al desaparecer los territorios, no hay un procedimiento simple y público que permita distinguir entre amigos y enemigos, de manera que nos vamos acostumbrando al hecho de que no seremos tratados igual, con base en sospechas que pueden ser justificadas o no. La sospecha es lo opuesto al imperio de la ley, de acuerdo con el cual nadie puede ser condenado sino por crímenes que ha cometido, y que supone que las penas son proporcionales a las ofensas. La persecución no es justicia, que guarda la proporción entre la ofensa y el castigo, sino conveniencia, que tiene el riesgo de cometer algunos errores infortunados, como el del brasileño Jean-Charles de Menezes, asesinado como sospechoso islamista de los atentados cometidos en julio del 2005 en Londres, o los miles de jóvenes que han sido asesinados por toda Colombia ante la sospecha de que pueden llegar a engrosar las filas de la delincuencia o de los grupos insurgentes.⁶

La sospecha es al imperio de la ley lo que la puesta en marcha de la defensa preventiva es a la declaración de guerra. Si su comienzo es la sospecha, la guerra contra el terrorismo no puede tener ningún fin claro en el tiempo. Como ningún acto oficial la inició, ninguno la puede terminar; de

esta manera, no llegará ningún momento a partir del cual podamos vivir en paz. Por el contrario, nuestra imagen del peligro podrá variar; los actos terroristas podrán ser más o menos frecuentes. Y así, la seguridad de los santuarios podrá ser mantenida con más o menos éxito; podrá haber treguas y periodos de calma. Pero no hay propiamente una guerra que se pueda ganar, sino una situación de violencia permanente en la que siempre existe el riesgo de perder. La guerra contra el terrorismo constituye el estado de violencia, la manera en que los conflictos violentos se han institucionalizado como parte de la globalización. Si continuamos defendiendo los santuarios de paz, cada vez más pequeños y más desiguales, continuaremos gastando recursos en defendernos y perderemos esta guerra, que no se puede ganar. Lo que podemos hacer es reducir el número y la intensidad de los estados de violencia a través de una institucionalización diferente de los conflictos (Dumouchel, 2008-2009: 182-184).

3 Colombia en el contexto regional

La noticia más importante en el ámbito global en este último año ha sido la crisis financiera y su impacto en el mundo entero. La mayoría de los países desarrollados han entrado en crisis, y la salida no es clara aún. Esta crisis ha producido la quiebra de cientos de empresas, así como el incremento del desempleo y de la miseria, a lo cual los gobiernos de los países desarrollados responden con subsidios y los países andinos han respondido con un menor gasto social, una caída de las reservas y un incremento de la deuda pública externa e interna:

El Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento mundial en 2009 decaerá un 0,5%. La Organización Internacional del Trabajo estima que más de 50 millones de personas adicionales perderán su empleo en 2009. La cantidad de los pobres que trabajan y viven con menos de US\$ 2 por día puede también incrementarse en hasta más de 200 millones. [...] El Banco Mundial indica que entre 55 y 90 millones más de personas pasarán al nivel de extrema pobreza como resultado de la crisis, que se sumarán a los 160 a 200 millones que se estima cayeron en la pobreza a raíz del aumento en el precio de los alimentos entre 2005 y 2008.⁷

Estos problemas confluirán con los sistémicos no resueltos en el reciente quinquenio de la abundancia: no hubo cambios de fondo (ni diversificación productiva, ni saltos tecnológicos), y pese a ser el propósito político, este crecimiento no se tradujo en una reducción sustantiva de la pobreza, ni mucho menos de la desigualdad, lo que dio como resultado la persistencia de sistemas sociales extremadamente desiguales en un contexto de prosperidad (Virtuoso, 2008: 1).

La crisis financiera ha llevado a los gobiernos de los países desarrollados a centrarse más en las cuestiones internas y a gastar su dinero en programas nacionales de rescate, reduciendo la ayuda internacional; las empresas se aseguran de su propia estabilidad suspendiendo inversiones en el extranjero o despidiendo a trabajadores; el deterioro del acceso al crédito o al mercado de capitales ha reducido las inversiones. El achicamiento de las empresas trae aparejado el de los ingresos fiscales, lo que dificulta las inversiones de los países en desarrollo en redes de seguridad social e incluso en alimentos, educación y acceso a los medicamentos. Hay menos gastos suntuarios, de forma que se prefiere consumir productos locales, y menos gasto en turismo en el exterior. Los

precios de productos básicos como el café, el algodón o los minerales han disminuido porque la demanda se ha contraído. «Al mismo tiempo, los trabajadores migrantes en países desarrollados también están perdiendo sus empleos y tienen menos dinero para enviar a sus familias en países en desarrollo. Las remesas equivalen a cuatro veces el valor de la asistencia internacional para el desarrollo»;⁸ se prevé que disminuyan considerablemente y afecten directamente el bienestar social de esas familias (véase el cuadro 3). Asimismo, muchos migrantes deberán retornar a sus países, lo que podría aumentar el riesgo de malestar social debido a la mayor competencia por los empleos disponibles.⁹ En Latinoamérica hay una manifiesta incapacidad tanto de analistas como de funcionarios económicos para identificar la verdadera vulnera-

bilidad de la economía de cada uno de los países, lo que ha contribuido a la incertidumbre y a la imprevisibilidad permanente. El que sigue podría tratarse de un periodo prolongado de bajo crecimiento y un ritmo menor de recuperación, similar a la crisis de la deuda de los años ochenta, que llevó a la región a un crecimiento sin precedentes de la pobreza y la desigualdad social:

Parece existir un consenso entre economistas de que, incluyendo a Chile, las naciones de Latinoamérica carecen de la capacidad fiscal que se necesita para implementar las políticas contracíclicas requeridas en la presente coyuntura. [...] no cuentan con los recursos necesarios para estimular sus economías, ayudar a sus

Cuadro 3 Algunos datos económicos de Colombia

La estructura empresarial colombiana está conformada principalmente por micropresas y pequeñas y medianas empresas. El número de grandes industrias en el año 2009 es de 7.257. Según el Gobierno, en el 2009 había 1.172.000 microempresas, lo que representa una disminución con respecto a la cantidad de microempresas que operaban en el año 2007, cuando eran 1.218.000; además, las microempresas han disminuido sus ventas en un 4,9% durante el año 2009. En el 2009, el comercio minorista ha tenido un desempeño del -3,44%; por el contrario, el 84% de las más grandes empresas han crecido en medio de la crisis. Las microempresas generan el 50,3% del empleo, mientras que las pequeñas empresas generan el 17,6%, las medianas el 12,9% y las grandes el 19,2%. La principal actividad de las microempresas colombianas es el comercio (47,3%), seguido de los servicios (39,1%) y la industria (11,1%). El 49,6% de estas empresas no llevan contabilidad y el 63,7% no tienen o no han renovado su registro mercantil en el primer semestre del 2009; se trata de empresas con altos niveles de informalidad, bajo nivel de asociatividad, estrechez en sus mercados, bajo nivel tecnológico y de la formación de su personal, y limitado acceso al sector financiero. Esta informalidad general es mayor cuanto menor es el tamaño de la empresa, y limita su capacidad para llevar a cabo actividades rentables, centrándose en el mercado local, con consumidores de bajos recursos y pocas exigencias de calidad.

En el año 2008, Colombia exportó bienes por un valor de 37.625 millones de dólares. Las exportaciones colombianas, constituidas principalmente por petróleo, carbón, café y ferromniquel, han caído un 18,5% en el 2009. Las importaciones han experimentado una caída similar (-18,7%) en este mismo año; los principales productos que se importan son vehículos ensamblados y aparatos de telecomunicaciones y materias primas para las industrias, entre las que se incluyen tubos de hierro o acero, papel periódico y cartones, y trigo. Las exportaciones no tradicionales han caído en el año 2009 (-13,4%), sobre todo las destinadas a la Unión Europea (-20,8%), siendo los productos más afectados las confecciones (-51,9%) y los productos de cuero (-59,9%). Los principales productos no tradicionales de exportación son los alimentos y bebidas. Las industrias que más han crecido en los últimos años son las de metales preciosos y la fabricación de equipos de transporte.

Los países de donde más remesas se han recibido en el año 2009 son España (39,2%) y los Estados Unidos (34,1%); la crisis económica global se nota en que esta correlación ha cambiado, pasando los Estados Unidos de ser la principal fuente de remesas en el año 2005 (44,2%) a ser la segunda, mientras que el porcentaje que se envía desde España se ha mantenido constante (era el 39,6% en el año 2005). La cantidad de dinero enviado a través de remesas pasó de 1.578 millones de dólares en el año 2000 a 4.848,4 millones de dólares en el 2008; en el año 2009, al mes de octubre se han enviado 3.624,3 millones de dólares.

Los principales países de origen de la inversión extranjera son los Estados Unidos, diversas islas del Caribe, Panamá, España, México y Brasil. El capital colombiano se invierte principalmente en los Estados Unidos, Panamá, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador y México.

Colombia es uno de los cinco países que concentra el 80% de la inversión extranjera en la región, junto con Brasil, México, Argentina y Chile. En el año 2008, la inversión extranjera en Colombia sumó 10.564 millones de dólares; la mayor parte de esta inversión se dirige al petróleo y la minería.

Los proyectos de las empresas multinacionales muchas veces han estado asociados a procesos de desplazamiento forzado de la población campesina, como señaló el Tribunal Internacional de Opinión sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia en diciembre del 2007: «Las multinacionales [como son Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Keshada, Smurfit Kapa-Cartón de Colombia, Pizano, S. A., y su filial Maderas del Darién, Urapalma, S. A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit, S. A., filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal de Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa, S. A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold-Cobre y Oro de Colombia, S. A.] son cómplices del desplazamiento al financiar y prestar sus instalaciones a los grupos paramilitares que amenazaron y masacraron a miles de sindicalistas, y a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. [...] La sobreexplotación de las materias primas (petróleo, oro y otros metales), la extensión de los monocultivos para la exportación de productos agropecuarios, y últimamente para la producción de agrocombustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Obedecen a las exigencias de la globalización del capital y acentúan el carácter dependiente de las clases dominantes colombianas frente al capital principalmente norteamericano y europeo. A la catástrofe social se añade un desastre ecológico».

Fuente

Departamento Nacional de Estadística, *Boletín de Comercio Exterior*, enero-diciembre 2008; Departamento Nacional de Planeación (<http://www.dnp.gov.co>); diario *La República*; diario *El Espectador*; *Verdicto del Tribunal Internacional de Opinión sobre el desplazamiento forzado en Colombia* (<http://www.nodo50.org/tortuga/Verdicto-del-Tribunal>).

bancos y corporaciones, subsidiar a sus consumidores, defender sus monedas y proteger a grupos vulnerables. (Virtuoso, 2008: 2-3)

Como consecuencia de todo lo anterior, es probable que surjan tensiones políticas y una mayor polarización, por lo que las decisiones económicas serán un asunto de mayor conflicto.

El cambio de gobierno en los Estados Unidos no ha tenido mayor repercusión con respecto a las relaciones militares con Colombia, debido a que el cierre de la base de Manta, en Ecuador, llevó a un acuerdo de uso de siete bases militares colombianas por parte de tropas de los Estados Unidos. Así, Colombia sigue apareciendo para los Estados Unidos como socio militar frente a la lucha contra el narcotráfico, y el Gobierno de Colombia ha aprovechado esta especial relación para profundizar su política de «seguridad democrática», es decir, la lucha contra las guerrillas, convertidas en narcoterroristas.

Esta situación se relaciona con la tensión que vive Colombia con sus vecinos por el manejo de las fronteras, donde no sólo hay cientos de personas buscando refugio y asilo político, sino que se encuentran nuevos espacios para la confrontación con la guerrilla, siendo el hecho más grave al respecto el bombardeo de Colombia a Ecuador para dar muerte a Raúl Reyes, segundo hombre de las FARC de Colombia, en marzo del 2008. Con este antecedente, los países vecinos expresan su preocupación por el uso de esas bases militares contra sus propios gobiernos, no tan alineados con las políticas de los Estados Unidos como Colombia.

Las tensiones entre los países andinos parecen referirse al desencuentro de modelos diferentes de democracia, unos más centrados en cambios desde arriba, como el Estado comunitario y de opinión que promulga el presidente Uribe en Colombia, otros más encaminados a instaurar transformaciones sociales desde las mismas bases sociales, como los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Pero estos sesgos más a la derecha o a la izquierda olvidan que se trata de modelos de gobierno análogos en sus dinámicas, es decir, simétricos, aunque con tendencias políticas opuestas. Una retórica presidencial con un alto contenido mesiánico, que se muestra a partir de diferenciarse de un pasado de corrupción, con la idea de que se trata de una nueva fundación de la patria, en la práctica se trata de la consolidación de gobiernos autoritarios y antidemocráticos, con altísima concentración de poder, destrucción de las oportunidades de acción de la oposición institucional y desmantelamiento de los sistemas constitucionales de controles y contrapesos, el ejercicio caudillista y personalizado del poder presidencial, entre otros (Virtuoso, 2008: 12).

4 El proyecto de seguridad

El proyecto de gobierno del presidente Uribe se puede sintetizar, en sus propias palabras, de esta manera:

El Gobierno de Colombia ha expresado que la Seguridad Democrática no es un fin en sí mismo, sino un medio para que los colombianos, las nuevas generaciones, puedan vivir en paz. [...] Estamos convencidos de que solamente un marco sostenido en el tiempo de seguridad y de inversión puede generar una situación de prosperidad, que se convierta en cohesión social, en superación de pobreza, en construcción de equidad, lo que, a su vez, se convierte, se constituye en el gran validador de la seguridad, en el gran validador de la inversión. [...] Por aquello que debe luchar el continente

es por una democracia moderna, que debe tener los siguientes elementos: seguridad, libertades, cohesión social, independencia de las diferentes instituciones que conforman el Estado para que opere el sistema de controles, y transparencia, como factor de confianza de cada individuo en el conglomerado y como factor de confianza de cada individuo y del grupo social en las instituciones del Estado.¹⁰

El presidente Uribe reconoce los siguientes logros de sus siete años de gobierno:

Hoy, 41 millones de colombianos con seguro de salud. Hoy, 2 millones de Familias en Acción. Hoy, 3 millones de nuevos microcréditos. Hoy hemos avanzado casi al ciento por ciento en cobertura educativa. Tenemos 6 millones de estudiantes en el Sena. Estamos enseñándole inglés, a través del Sena, a una meta que este año completará un millón de estudiantes. Falta mucho, pero estamos avanzando en los tres temas: en seguridad, en inversión y en la política de cohesión social.¹¹

La política de «seguridad democrática» del presidente Uribe ha logrado una disminución de la violencia de escala nacional, lo que le ha asegurado un gran apoyo según las encuestas de opinión. Así, la presidencia de Uribe se sostiene con altísimos índices de popularidad y suele contar con el respaldo de los grandes medios de comunicación, los cuales en todo caso dan cabida a una disidencia ilustrada.

Pero el Gobierno también ha trabajado en la política de cohesión social, a través de fuertes programas sociales que enfrentan los desafíos de la pobreza. En términos generales, el Gobierno se mueve dentro de los márgenes de la ley (Kruijt y Koonings, 2008), si bien ha manejado la ley en función de sus políticas y de la continuidad de su gobierno por dos mandatos y ahora para la búsqueda de uno tercero. Esto último produce el temor de que el sistema de contrapesos establecido por la Constitución se pierda.

La política de «seguridad democrática» es la lucha contra las guerrillas, convertidas en narcoterroristas en el discurso oficial. La imagen que promueve el Gobierno con esta política es la búsqueda de una paz entendida «como una política integral para el desarrollo social, económico y político» (Guerro, 2009). Se trata de incrementar el número de miembros de las fuerzas militares, modernizarlas y contar con el apoyo técnico y táctico de los Estados Unidos, en particular en asuntos de inteligencia y en formas de guerra donde predomina la alta tecnología sobre el enfrentamiento directo; a esto se le suma una fuerte campaña para promover la desertión de guerrilleros (International Crisis Group, 2009). Esta estrategia le ha permitido recuperar el control de las carreteras, de manera que han disminuido sensiblemente los secuestros y se ha reducido a la mitad la cifra de víctimas producto del conflicto armado. A los éxitos militares del 2008 se ha sumado en el 2009 el «plan consolidación», que consiste en acciones cívico-militares de presencia masiva en medio de comunidades afectadas por la violencia, lo que constituye un avance en el plan de copiamiento de territorios adelantado por el Gobierno (Celis, 2009: 8-10).

La fuerza pública en Colombia está formada por los cerca de 300.000 miembros de las fuerzas armadas y los 130.000 miembros de la policía y sus fuerzas auxiliares; es proporcionalmente una de las mayores de Suramérica. Se trata de fuerzas que dependen considerablemente de la inteligencia que les proveen los Estados Unidos. La tarea central de estas fuerzas es la lucha contra el terrorismo, considerado «enemigo interno», junto con las operaciones antinarcóticos. En el pasado se ha documentado la cooperación de miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas paramilitares. En la actualidad, la policía está presente en todos los municipios del país, aunque se trata más de una presencia simbólica comparada con la de otros actores armados. La policía es un

cuerpo desorganizado, que sufre fricciones internas, lo que la hace muchas veces poco eficaz.

La política de seguridad democrática ha tenido, por el contrario, otra aplicación frente a los grupos paramilitares. Estos grupos se crearon al amparo del Gobierno colombiano como organizaciones regionales de autodefensa (grupos paramilitares), orientadas a ejecutar tácticas de contrainsurgencia. Desde 1981, estas organizaciones se vincularon a los carteles de la droga para prevenir el secuestro y la extorsión de sus miembros. A estos grupos se unieron varios ex oficiales de alto rango de la fuerza pública, junto con mercenarios y otros empresarios rurales. Frente a las crecientes críticas por las violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército, estos grupos se constituyeron en una alternativa contrainsurgente libre de controles. Su estrategia en la lucha antiguerrillera fue el establecimiento de «zonas limpias» donde imponían su poder a través de la violencia, la extorsión y la intimidación. En 1997, los grupos paramilitares formaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); así, las antiguas alianzas entre la narcoeconomía y los jefes paramilitares se convirtieron en entidades unificadas. Posteriormente, los líderes paramilitares utilizaron su poder para legitimarse, comprando grandes propiedades y aliándose con políticos por todo el país, en lo que ahora se conoce como la «parapolítica». En el 2004, el Gobierno nacional sancionó la Ley de Justicia y Paz, con la cual logró un acuerdo con los líderes de las AUC por el que se comprometía a no extraditarlos a los Estados Unidos a cambio de que cumplieren las condiciones de desarme y reinserción. Así, se han desmovilizado más de 30.000 combatientes de las bases de las AUC, quienes se han beneficiado de una considerable reducción de las penas. En la actualidad el poder de los grupos paramilitares se mantiene en muchas regiones, debido a sus complejas alianzas con empresarios, políticos y narcotraficantes.

5 La seguridad democrática como estado de violencia

El CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), centro de estudios sociales de la Compañía de Jesús, sostiene en el editorial de su análisis trimestral *Cien Días vistos por CINEP* (García, 2009):

[Sobre la seguridad democrática:] se hacen cada día más evidentes los vacíos que tiene la política: no hay estrategias para hacer frente a los problemas estructurales que subyacen al conflicto, como el tema de la distribución de la tierra, que las políticas del actual Gobierno no han hecho sino agravar; la ausencia de una estrategia de

seguridad urbana, como se puede percibir en los crecientes niveles de inseguridad en las ciudades y en los «mecanismos» que se suscitan para hacerle frente como las amenazas, los panfletos y la «limpieza social»; los mecanismos establecidos por la Ley de Justicia y Paz se muestran altamente limitados para dar justicia y reparación a las víctimas [...].

Con el Gobierno del presidente Uribe han disminuido los secuestros que las guerrillas efectuaban en las carreteras, pero la hostilidad entre los grupos armados no ha cesado: en el año 2008 se produjeron 1.050 combates y 143 ataques guerrilleros de diverso tipo, entre los que sobresalen los incidentes en campos minados, que fueron 221 (véase el cuadro 4). Según los datos del CINEP, este conflicto armado dejó 16.140 muertos en el 2008 (Angulo y otros, 2009). La tragedia humanitaria no se reduce a las familias de quienes han muerto en este conflicto, sino que esta violencia ha producido el desplazamiento interno de más de 4 millones de personas, considerado por la Organización de las Naciones Unidas como la mayor tragedia humanitaria de la actualidad.

El Gobierno ha venido mostrando resultados militares contra la guerrilla de las FARC a través de la liberación de diversos secuestrados y el asesinato de varios líderes de este grupo guerrillero. Pero tres factores han opacado los éxitos de la seguridad democrática:

- Los escándalos de la llamada «parapolítica», en los cuales se han visto comprometidos servidores públicos de alto nivel que han apoyado sin reservas al presidente Uribe Vélez.
- Los llamados «falsos positivos» que involucran a altos oficiales del Ejército colombiano, poniendo en entredicho las estrategias militares con las que las fuerzas armadas han puesto a su favor la guerra.
- El denominado fenómeno de las «pirámides», que hace evidente, por lo menos, la negligencia del Gobierno para afrontarlo y evitar así la crisis social que se engendró desde hace varios años.¹²

Aunque se trata de graves escándalos, el más importante de ellos ha sido el de los asesinatos extrajudiciales, presentados a la opinión pública como acciones «positivas» en la lucha antiterrorista, que resultaban ser en realidad «falsos positivos». El relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, ha calificado estos asesinatos de la siguiente manera:

Se trata del asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio [...]. Repercute de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios [...]. El procedimiento es conocido: Un

Cuadro 4 El conflicto armado en Colombia

El conflicto armado en Colombia produce más de 1.000 muertos al año, por lo cual se considera uno de los diez conflictos de alta intensidad en el mundo actual.

Hay aproximadamente 150.000 metros cuadrados de terrenos sembrados con minas antipersonales. En el año 2007 estas minas ocasionaron 895 pérdidas humanas; en el 2008, 777.

Según cálculos del año 2003, hay entre 11.000 y 14.000 niños soldados. Entre los años 1996 y 2006 un total de 22.621 niños y niñas fueron secuestrados por los grupos armados.

Entre 2 y 4 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental en la actualidad. Sólo el 8% de las personas en situación de desplazamiento encuentran asistencia efectiva del Gobierno.

La población refugiada es de 560.000 personas.

Fuente Fisas (2009); Landmine Monitor (2009); Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia; *Hechos del Callejón*, 15 (junio 2006).

«reclutador» engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinatos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla [...]. Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas [...] pero hubo matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello [...]. Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas—incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados— indican firmemente que ése no es el caso. Entre los «peligrosos guerrilleros» que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia [...]. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo cuatro tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate [...]. Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató cómo en el 2008 uno de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común [...]. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstos fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.¹³

Parece que el proyecto de «seguridad democrática» busca prolongar hasta el infinito la guerra para seguir sacándole dividendos políticos e intentar una y otra vez ganar las elecciones a costa de la sangre de miles y miles de personas (Guerrero, 2009). Se trata de una paz centrada en ganar la guerra contra la guerrilla, lo que suele significar ejercer la violencia contra la gente pobre, las organizaciones populares y la oposición: si bien el Gobierno firmó pactos de desmovilización con los grupos paramilitares, éstos conservan su poder y continúan con su labor de expropiar las tierras y bienes que les interesan.

A pesar de los acuerdos de paz y del proceso de desmovilización adelantados gracias a la seguridad democrática, se mantiene el estado de violencia. Muchos líderes y grupos paramilitares no se han desmovilizado o han retornado a la violencia. Las personas de origen afro e indígena siguen estando entre las principales víctimas, tanto por el número de personas asesinadas como porque han sido despojadas de sus tierras por parte de colonos, terratenientes, empresas multinacionales, traficantes de droga y grupos armados ilegales.¹⁴ Con cifras de desplazamiento interno por causa de la violencia que se sitúan entre los 3 y los 4 millones de perso-

nas, en lo que constituye la peor tragedia humanitaria del hemisferio occidental en la actualidad, los indígenas y las negritudes conforman más del 46% de los desplazados internos; las personas indígenas desplazadas son el 16% del total de las personas en situación de desplazamiento interno, cuando representan menos del 2% del total de la población (véase el cuadro 4). En general, se considera que las personas afrocolombianas tienen un 84% más de probabilidades de ser desplazadas que los mestizos. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, las personas en situación de desplazamiento viven en condiciones de mayor pobreza que las personas que han sido históricamente pobres. La mitad de las personas en situación de desplazamiento viven en chozas construidas a base de plásticos, telas y maderas; el acceso a la educación es económica y físicamente difícil. La educación de los niños y niñas indígenas y afrocolombianos se ve con frecuencia interrumpida o es abandonada definitivamente por causa del desplazamiento forzado.

Además, los grupos paramilitares suelen entrar a los asentamientos de personas en situación de desplazamiento a reclutar de manera forzada a las personas menores de edad. Existen procesos de vinculación de la población juvenil a las diversas modalidades de la violencia, desde el reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales hasta las pandillas; según Afrodes (2009), más de 8.000 jóvenes afrodescendientes han sido reclutados por los grupos armados ilegales.

En todo caso, la política de seguridad democrática tiene debilidades porque la presencia de fuerzas del Estado en el 60% selvático del territorio nacional y en las cumbres de sus tres cordilleras es difícil de sostener, las guerrillas no han sido derrotadas sino que se han replegado y fraccionado, huyendo muchas veces a las selvas de los países vecinos, y porque las alianzas que las guerrillas han establecido con el narcotráfico pueden llevar de la dispersión a la asociación fraccionada con el crimen internacional, haciendo que el estado de violencia se perpetúe, en lugar de que se consolide el Estado de derecho. Además, el plan de gobierno no tiene en cuenta soluciones políticas a la violencia, rechaza las propuestas de mediación nacional o internacional con los grupos insurgentes y no fortalece las instituciones públicas y sociales en el ámbito local ni crea un Estado de derecho sostenible (International Crisis Group, 2009).

La confianza inversionista como empobrecimiento de las mayorías

6

Colombia es un país extremadamente desigual: el 10% de sus cerca de 44 millones de habitantes consume el 46,7% de los recursos, pero alrededor de la mitad de la población vive debajo de la línea de pobreza, es decir, no tiene ingresos para resolver al menos una de sus necesidades humanas básicas (véase el cuadro 5). Según las organizaciones sociales, la población afrocolombiana la constituyen 11.745.403 personas, y los indígenas apenas sobrepasan el 3% de la población, aunque representan 84 pueblos de diferentes lenguas y culturas, siendo, por lo general, los más pobres entre los pobres. Los afrodescendientes tienen un ingreso promedio anual de 500 dólares por persona; por contra, el del resto de los colombianos es de 1.900 dólares. El 80% de los afrocolombianos vive en la extrema pobreza, mientras que el promedio nacional es del 46%. El país se ha vuelto mayoritariamente urbano, y se concentra en cinco grandes ciudades; sin embargo, la mayoría de la población indígena y afrocolombiana vive en el campo, en zonas de selva tropical, y carece de los más elementales servicios de salud y educación. La educación públi-

ca no tiene suficiente cobertura, y la educación privada a la que pueden acceder muchas de las personas pobres es de muy baja calidad; la incapacidad de costear gastos de matrícula, uniformes y transporte es una de las causas por las que los indígenas y afrocolombianos tienen poco acceso a la educación. La tercera parte de los indígenas (31%) y afrocolombianos (33%) no han recibido nunca educación formal. La tasa de analfabetismo de indígenas y afrocolombianos oscilaba en el 2008 entre el 33 y el 31%. El 72% de los indígenas y el 87% de los afrocolombianos mayores de 18 años de edad no han completado la educación primaria. De todos los estudiantes de posgrado, sólo el 0,71% son indígenas, y el 7,07%, afrocolombianos (véase el cuadro 6).

En la perspectiva de la situación de las personas menores de edad frente al conflicto y al desplazamiento forzado, hay que señalar que las personas jóvenes en Colombia viven situaciones semejantes a las de sus pares en otros países de la región; sin embargo, cabe anotar que la cantidad de personas jóvenes que viven en condiciones de miseria e indigencia superan la media iberoamericana, que se sitúa para la indigencia en el 13,5% (Colombia: 19,4%) y para la pobreza, en el 37,7% (Colombia: 50,3%) (Navarrete, 2006: 22-26). Algo semejante ocurre con las causas externas de mortalidad entre las personas jóvenes, pues en Colombia la principal causa es la violencia (58 por cada 100.000 habitantes en el año 2003), mientras que el promedio iberoamericano es de 29 (CEPAL, 2008: 11). Después de la pobreza y la violencia, el principal problema que enfrentan las personas jóvenes en Colombia es el empleo (Sarmiento, 2004: 29). No sólo hay desempleo, sino que el empleo existente se precariza (contratación temporal, subcontratación, informalidad). En el terreno educativo, Colombia tiene uno de los índices

más bajos del continente en cobertura de la educación primaria (83,6%), así como de secundaria y media (62,7%). El sistema educativo es muy inequitativo (ibídem: 30), de forma que el 20% más pobre de la población tiene dificultades para terminar la educación secundaria, acceder a la educación universitaria y concluirla; esto se acentúa cuando se trata de hombres jóvenes de zonas rurales, de minorías étnicas como los afrodescendientes, indígenas y rom, y cuando provienen de familias cuyos padres tienen baja educación (CEPAL, 2008: 8).

El anterior ciclo de prosperidad económica no ayudó a reducir la enorme desigualdad, y el desempeño de la economía en el 2009 es aún incierto. Como por lo menos 211.566 personas¹⁵ invirtieron sus ahorros en fondos de la empresa DMG, que fueron posteriormente ilegalizados por sus altísimas tasas de retribución (pirámides), basadas según el Gobierno en el lavado de activos, muchas familias perdieron su capacidad de ahorro, lo que generó una grave crisis económica en el sur del país, zona especialmente golpeada por las acciones de las FARC y el narcotráfico. Además, los dueños de estos fondos de inversión se han visto relacionados con los hijos del presidente Uribe¹⁶ y con el transporte de las firmas de apoyo al referendo para la segunda reelección de Uribe.¹⁷

Por otro lado, como Colombia cuenta con un sector empresarial relativamente pujante, el narcotráfico no explica la mayoría de los procesos económicos del país. La narcoeconomía se mide por su poder de corrupción frente a los agentes del Estado en todos los niveles, y por ser la base financiera de las fuerzas guerrilleras, las fuerzas paramilitares, las bandas de criminales y los ejércitos privados de los jefes de los carteles de la droga. Debido a su alianza con los Estados

Cuadro 5 *Economía y sociedad*

Tasa de cambio: 1 dólar = 1.962 pesos colombianos; 1 euro = 2.900 pesos colombianos (a 20 de noviembre del 2009).

Producto interior bruto: 243.924 millones de dólares.

Producto interior bruto per cápita: 5.444 dólares (ajustado a posibilidades de consumo).

El PIB tuvo un crecimiento sostenido entre los años 2003 y 2007, pasando del 4,61 al 7,55%, pero en el 2008 se contrajo al 2,43%, y en el 2009 se han acumulado dos trimestres negativos, con -0,45% y -0,51%.

Salario mínimo legal: 515.900 pesos colombianos (para el año 2010).

Cesta de consumo para obreros: 979.557,15 pesos colombianos.

Cesta de consumo para empleados de ingresos medios: 2.437.936,73 pesos colombianos.

Población que vive debajo de la línea de pobreza: más del 60%. Mientras que en el 2007 el porcentaje de población bajo la línea de pobreza era del 23,8% en Bogotá, este porcentaje para el departamento del Chocó, en el occidente colombiano, era del 73%. En cuanto a la población bajo la línea de indigencia, en Bogotá era del 7% y en el Chocó del 42%.

Personas no afiliadas al sistema general de seguridad social en salud: 6.095.405.

Personas en edad de trabajar que tienen trabajo: 64,6%. Se reconoce un índice de desempleo del 12,2%, y la población restante califica en diversas variantes de subempleo (datos de septiembre del 2009).

Niños y niñas entre los 5 y los 14 años de edad que trabajan: 5%.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (<http://www.dnp.gov.co>); PNUD Colombia, *Informe de Desarrollo Humano para Bogotá 2007; Hechos del Callejón*, 15 (junio 2006).

Cuadro 6 *Educación y medio ambiente en Colombia*

Hombres y mujeres alcanzan niveles similares en la educación del país. El 10,2% de los hombres y mujeres no han recibido ningún grado de educación. No terminan la educación primaria el 10% de los hombres y el 16,1% de las mujeres. Finalizan la educación media el 12,8% de los hombres y el 14,4% de las mujeres. Al nivel universitario solamente llegan el 9,5% de los hombres y el 9,6% de las mujeres.

La ocupación del territorio no siempre se ha llevado a cabo con fines productivos, sino especialmente con el propósito de controlarlo. A través de la historia se han transformado 45 millones de hectáreas de bosque primario (casi una hectárea por habitante) para ser sustituidas por potreros, rastrojos y otras formas de subutilización de la tierra. Los usos de la tierra se distribuyen del siguiente modo: tierra cultivable, 4%; cosechas permanentes, 1%; pasturas permanentes, 39%; bosques y selvas, 48%; otros, 8%.

Fuente: <<http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/situacion/pdf/colombia.pdf>> y <<http://www.businesscol.com/comunidad/colombia/colombia02.html>>.

Unidos, el Gobierno colombiano realiza esfuerzos sistemáticos en la erradicación de cultivos a gran escala. Los programas de fumigación son controvertidos, pues diversos informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que el 50% de las personas en situación de desplazamiento se debe a estos programas. Todo indica que la industria de las drogas ilícitas ha adquirido una estabilidad a largo plazo y por eso sus efectos corruptos permanecen sin impedimento alguno, incentivando el estado de violencia.

Podemos volver a citar el editorial del CINEP (García, 2009):

En cuanto a la confianza inversionista, es claro que ha sido una política que favorece sin ninguna consideración social y del bien común los intereses de los grandes industriales, incluida la inversión extranjera, como bien se puede constatar en los incentivos tributarios que se le han dado, que hoy se reflejan en el alto déficit fiscal y en la ausencia de recursos aún para financiar la Seguridad Democrática. Sin embargo, la «otra cara de la moneda» son los problemas sociales que se generan con ello, como ha podido constatarse en el aumento sostenido de la protesta social. Uno de estos problemas es sin lugar a dudas el aumento del desempleo y del trabajo informal.

7 La cohesión social como unanimidad

Las relaciones del Gobierno con los medios son frágiles, pues dependen en alguna medida de las licitaciones en las que participan;¹⁸ una de las firmas encuestadoras también está vinculada al Gobierno, de manera que no toda la información sobre la popularidad del presidente es imparcial.¹⁹ Además, el Gobierno ha logrado permanecer durante varios años como la principal fuente de noticias del país, lo que ayuda a consolidar la imagen del presidente Uribe;²⁰ a la vez, todo cuestionamiento de periodistas al Gobierno ha sido duramente impugnado por miembros del Gobierno, lo que ha generado la imagen de que se trata de acusaciones infames y sin fundamento,²¹ en un clima de intolerancia y amenazas para la prensa independiente.

El Gobierno ha usado a la guerrilla, así como recientemente al presidente de Venezuela, Hugo Chávez,²² y a los países vecinos acusados de acoger a las FARC, para construir una imagen de nacionalidad que siempre ha sido difusa en Colombia; se trata de una imagen construida a partir de diferenciar a los colombianos de unos enemigos internos (la guerrilla) y externos (los presidentes Chávez y Correa). Así, se puede pasar de afirmar que la guerrilla está militarmente derrotada a acusarla de ser la causa de todos los problemas en Colombia, como la miseria, el problema de la acumulación de la tierra en poquísimas manos o la falta de infraestructura; a las FARC se las señala por estar infiltradas en la marcha indígena y en las protestas de los estudiantes y hasta se les echa la culpa de estar detrás del asunto de las pirámides para desprestigiar al Gobierno; lo mismo ha venido pasando con Chávez, a quien se le acusa de impedir las exportaciones colombianas o de dar cobijo a los líderes de las FARC. De este modo, contruidos los enemigos, se manipula a la población para que se polarice en torno al presidente como único salvador de la patria (Virtuoso, 2008: 26-28).

Es posible que en la actualidad la opinión pública exprese algunos cambios, pues las transmisiones públicas de las sesiones del Congreso han dejado en claro que la tercera elección de Uribe se ha buscado por medios poco transparentes, que rayan en buena medida en el delito. Además, la sensa-

ción general del aumento de la corrupción se ha hecho el pan de cada día: desde las grabaciones ilegales de las comunicaciones de quienes representan algún peligro para el régimen de Uribe, no sólo en la oposición política, sino en las altas cortes o en las agencias internacionales, hasta la porosidad del Gobierno con los narcotraficantes y paramilitares.

Así pues, podemos regresar al editorial del CINEP (García, 2009):

Finalmente, la cohesión social la ha entendido el actual Gobierno como la unidad en torno a la imagen del presidente Uribe, que se mide por los resultados de las encuestas, resultados que no siempre expresan el país real de los cuatro millones de desplazados y de la creciente protesta social. Todo lo que huele a oposición o a una perspectiva diferente a la del presidente debe ser controlado, como se hizo con las operaciones ilegales del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad], o descalificando radicalmente a las voces críticas, como se ha visto hacer en tantas ocasiones a los altos funcionarios del Gobierno, incluido el mismo presidente. Por otra parte, se avanza en esta «cohesión social» tratando de cooptar las otras instancias del Estado a favor del proyecto reeleccionista, como se ha visto en gran medida en el manejo del ejecutivo, en las nominaciones para la Corte Constitucional y ahora en la terna que el presidente presentó para nuevo fiscal, con candidatos que difícilmente podrán mostrar autonomía ante el poder ejecutivo.

8 La lucha por la paz desde la guerrilla

Las organizaciones guerrilleras llevan muchos años luchando en Colombia, como parte de una especie de tradición de campesinos armados. Las guerrillas actuales surgieron en los años sesenta; su ideología refleja a las izquierdas armadas que actuaron desde los años sesenta hasta los ochenta del pasado siglo. En la actualidad, solamente continúan en armas las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Según el ejército, las guerrillas tienen alrededor de quince mil combatientes. El secuestro y la extorsión han sido sus prácticas tradicionales de financiamiento, pero desde mediados de los años ochenta se han ido mezclando con el narcotráfico.

Las FARC continúan considerando que expresan «el anhelo colectivo de los pueblos» (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2009):

Estamos seguros de que a nosotros y a millones de colombianos nos gustaría ver florecer un nuevo gobierno, producto de ese pacto social, que convoque al diálogo de paz con participación de las organizaciones políticas y sociales del país, que lleve sus conclusiones a una asamblea nacional constituyente, para que el tratado de paz así logrado tenga, además, sustento constitucional. (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2008)

Por eso sostienen: «Nuestro objetivo estratégico fundamental es la paz. Lo asumimos con las mismas palabras del Libertador Simón Bolívar: "la insurrección se anuncia con el espíritu de paz. Se resiste al despotismo porque éste destruye la paz, y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz"» (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2009). El enemigo de la construcción de la paz que proponen las FARC es la oligarquía, expresada ahora en el

Gobierno de Uribe, de quien recuerdan que estuvo «vinculado de antaño a investigaciones por narcotráfico en los Estados Unidos y con el 30% de los congresistas de su partido en la cárcel por nexos con el narco paramilitarismo» (ibídem). Establecido el enemigo, sus milicianos no dudan en invitar de manera abierta a unirse a su lucha:

Todo ciudadano que resida en Bogotá debe llenarse de valor patrio, colaborar con todas las personas de bien, contribuir en el secreto de miembros del partido, las milicias y guerrilleros. Ayudar a movilizarlo ocultándolo de toda persona malintencionada y engañada por el Estado, informándole al guerrillero y miliciano los que integran las redes de sapos para darlos de baja, ajusticiar a los que han desertado de las filas de las FARC y se encuentran en los sitios de reinsertados, perseverar en el secreto, ayudarle a mover el material de guerra que se emplea contra la fuerza pública. (Galvis, 2009)

Como efecto, en el último año «la guerrilla reactivó sus ataques contra las Fuerzas Armadas, y extendió la ofensiva contra blancos de naturaleza civil como vehículos de transporte terrestre, acueductos, la red de carreteras, y algunas sedes bancarias y comerciales en capitales de provincia» (Escuela de Cultura de Pau, 2009: 22).

La paz que propone la guerrilla se erige contra la seguridad democrática, y supone una financiación que proviene de impuestos a los cultivadores de coca y a las personas e instituciones con gran capital. Quien no pague estos impuestos es secuestrado. Quien no apoye este proyecto de paz es atacado con violencia. Se comprende mejor esta dinámica al reconocer que el enemigo señalado no sólo es la oligarquía y el Gobierno, sino el imperio; por eso, frente a la intervención del Gobierno de los Estados Unidos y de las empresas multinacionales en la violencia que se vive en Colombia, sostienen la siguiente postura:

En el espíritu de minimizar el impacto sobre los no combatientes, las FARC expidió la Ley 002 sobre tributación, que cobra un impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares y que sólo en última instancia contempla el recurso de la retención. La guerra a medida que se generaliza produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2008)

Toda esta imaginación bélica ocurre en medio de una sociedad que ha rechazado masivamente sus acciones, a través de las multitudinarias marchas del año 2008 contra el secuestro y del apoyo sostenido al Gobierno de Uribe. Su propuesta de un diálogo que se traduzca en reformas sociales de fondo para dejar las armas²³ parece una falsa ilusión, pues el Gobierno no tiene intención de dialogar con las guerrillas, sino de obligarlas a dejar las armas admitiendo su fracaso; además, como veremos a continuación, porque las luchas sociales cada vez con mayor claridad toman distancia frente a las guerrillas, camino que ya habían seguido los partidos políticos de izquierda hace unos años.

9 El recurso a la memoria como alternativa

En síntesis, las instituciones colombianas han constituido un estado de violencia, expresado tanto en la lucha contra el

terrorismo como en la lucha contra la oligarquía; no es una guerra que se pueda ganar, sino, por el contrario, una en la que todos los ciudadanos siempre y de manera permanente pueden perder. A las acciones violentas de los principales actores —el Gobierno y las guerrillas, unos defendiendo una imagen de paz de unos santuarios seguros, y otros una imagen del anhelo colectivo del pueblo, cada uno con sus complejas relaciones— se les vienen dando diversas respuestas sociales, muchas de las cuales buscan reducir la intensidad de este estado de violencia a través de una conducción no violenta de los conflictos sociales (Dumouchel, 2008-2009: 182-184).

Los movimientos sociales y políticos alternativos y populares han generado su propia dinámica fuera de la inercia del estado de violencia. Esto se ha expresado en las manifestaciones masivas de los meses de febrero, marzo y julio del 2008, siempre contra alguna de las formas del estado de violencia. En septiembre del 2008 los empleados judiciales se lanzaron a una huelga que duró un mes, pidiendo que se aplicara una nivelación salarial decretada hace varios años, pero siempre aplazada en su ejecución. El sistema judicial se paralizó y el Gobierno tuvo que recurrir a decretar el Estado de excepción previsto en la Constitución para disponer medidas que permitieran corregir los desajustes causados por el paro. También en esos meses las comunidades indígenas del sur organizaron una minga nacional, entendida como una gran movilización que los llevó primero a Cali y luego a Bogotá, reclamando tierras para sus resguardos y soluciones a los graves problemas sociales que aquejan a la población pobre del país. De estas movilizaciones multitudinarias se puede afirmar lo siguiente:

- Crece un rechazo a la violencia como forma de expresión política (no al secuestro, no a la impunidad, no a la guerra).
- Se van rompiendo el letargo y la indiferencia acostumbrados en la cultura de la sociedad colombiana, frente a hechos que lesionan la dignidad humana.
- Aunque los actores de mayor poder tratan de manipular la opinión a su favor, ya no lo consiguen tan fácilmente, de modo que nuevas franjas de la sociedad, con mayor conciencia política, reclaman autonomía para su expresión pública.
- Se colocan en el escenario opiniones y posturas diferentes a la voz de Uribe, que le disputan la comunicación de verdades en una perspectiva diferente.
- Las víctimas de la violencia del conflicto interno van encontrando espacios de manifestación pública y cierta resonancia a sus reclamos en la sociedad misma y fuera de ella.
- La situación del conflicto colombiano comienza a tener otro tipo de resonancias en ámbitos internacionales, más allá de las pugnas ideológicas entre los sectores más polarizados.
- La discusión sobre la situación de los derechos humanos comienza a ser interpretada a la luz de los hechos reales de violación y de esperanza para superar el conflicto.²⁴

De esta manera, en un estado de violencia con múltiples actores, actuando siempre unos como espejo de los otros pero contrapuestos, se observa que actúan de la misma manera, existiendo en realidad como rivales simétricos. En los dos casos, sus proyectos de paz están constantemente produciendo víctimas: aquellas que necesitan de manera inevitable para poder existir.

Sin embargo, algunas de las víctimas no se identifican a sí mismas con ninguno de esos proyectos de una paz alcanzada con la violencia. Ellas buscan en sus propias historias experiencias capaces de permitirles resistir sin recurrir a una nueva violencia. Podemos reconocer lo que viven las personas desplazadas escuchando la voz de las mujeres. Ellas claman, pidiendo ayuda:

¡Tenemos hambre! [...] La verdad nosotras tenemos muchos problemas, el más grave es la falta de trabajo y oportunidades que hay para nosotras. Nuestros problemas parecen no tener fin [...] No hay trabajo, hay que tener palancas, si uno es de Soacha o desplazado, no nos dan trabajo. A eso se suma la educación, que tomamos cursos y no conseguimos trabajo [...] Los desplazados somos lo peor: guerrilleros, paras, drogadictos, y las empresas por políticas no nos dan trabajo.²⁵

Somos desplazados y hacemos y hacemos cosas pero nadie nos escucha, podemos reventarnos gritando y diciendo y nadie nos escucha. Se pueden movilizar todos los colombianos vestidos de blanco, nadie nos escuchará, ni el Estado, ni las FARC, ni los Paras. [...] Podemos reventarnos gritando que nadie nos escucha. Podemos hacer muchas cosas pero el Gobierno no hace nada. Podemos marchar, pero al Gobierno ni a las guerrillas les importa nada nuestras vidas.²⁶

Estas mujeres son cabeza de familia. Ellas han escapado del campo después de haber sido forzadas a presenciar cómo los guerreros torturaron y asesinaron a sus seres queridos. Para sobrevivir, ellas han escapado y han llegado a vivir en la periferia de las ciudades. Ellas viven con miedo, porque son testigos de asesinatos atroces. Y viven en la incertidumbre, en un mundo urbano que no entienden y ante un Estado que las ignora. Para las personas que viven en situación de desplazamiento, la paz del Gobierno significa que sus derechos serán tramitados a través de la Ley de Justicia y Paz, paradójicamente sesgada para favorecer a los victimarios y desconocer a las víctimas; y la paz que impone la guerrilla significa destierro y muerte.

A finales del 2008, una propuesta surgió de las comunidades indígenas, con sus diferentes culturas y religiones. Éstas invitaron a una minga nacional.²⁷ Se trata de una propuesta política y de acción de los pueblos indígenas, en construcción y con objetivos a largo plazo, que surge de la conciencia de que «Los pueblos necesitamos solidaridad recíproca y unidad, caminar juntos para defender la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad».²⁸ Conscientes de que lo que sucede en el país y en sus territorios es grave y no puede esperar, convocaban a la movilización inmediata. Los objetivos que plantearon son los siguientes:

- Dentro del movimiento indígena, responder a la amenaza que representa para la vida de las comunidades indígenas la agresión neoliberal, objetivo que les ha llevado a un compromiso de formación y lucha para tomar conciencia de la agresión, resistirla y construir alternativas de vida desde lo propio.
- Hacia fuera: a) plantear exigencias de carácter urgente para detener políticas, procesos y proyectos que amenazan la supervivencia y la seguridad de los pueblos, organizaciones y comunidades; b) establecer instancias y mecanismos de articulación y convergencia con otros procesos y organizaciones populares para trabajar y actuar unidos, fortalecer la resistencia y construir alternativas que hagan posible un país diferente; c) fortalecer la solidaridad recíproca de los pueblos y procesos de América y el mundo, con quienes compartimos la resistencia y la lucha por otro mundo posible y necesario.²⁹

La minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes, un esfuerzo colectivo convocado con el propósito de lograr un objetivo común. Así, cuando se convoca una minga, ésta tiene prioridad sobre otras actividades, que se posponen para cumplir con el propósito común. La coordinación debe ser colectiva, y así los resultados no tienen dueños, porque son del colectivo y no hay manera de que alguien se los pueda adjudicar. La disciplina, la capacidad de actuar en comunidad, la humildad, el aporte del máximo

esfuerzo individual para un logro colectivo, la conciencia de que lo común supera lo particular, pero cada esfuerzo particular es esencial, son características de la minga, que evidencian la madurez de los pueblos.³⁰ Su capacidad de convocatoria radica en la conciencia, la unidad y la claridad política de una propuesta amplia y de largo alcance, como lo han manifestado:

Nos movilizamos porque no tenemos otra alternativa y lo hacemos como un llamado humilde y vehemente a que no nos miren y nos aplaudan o critiquen desde lejos, porque éste no es un asunto de indígenas sino de vida o muerte.³¹

La minga, por tanto, significa trabajo conjunto y es entendida como un acto de afirmación de la vida. Cuando las comunidades indígenas invitaron a toda la sociedad, ellas usaron sus tradiciones como fuerzas capaces de promover una paz que no genere nuevas exclusiones. Así lo interpretaron las mujeres que viven en situación de desplazamiento:

Participé en la marcha de los indígenas, yo soy del Cauca y ésa fue una marcha diferente, allí sí había un objetivo, las personas fueron seleccionadas y estaban organizadas y todas sabían por qué iban a marchar. Había unidad. Se quería que la marcha fuera una oportunidad para dialogar en los diferentes lugares donde se llegara, para que la gente conociera la situación del país y por las que estaban pasando los indígenas.³²

Las comunidades indígenas han realizado nuevas mingas, esta vez para recuperar los cuerpos de sus hermanos, víctimas de la violencia ciega de los actores del estado de violencia, desplazados de sus territorios en una lucha cuyo eje es la tierra, porque precisamente ha perdido su sentido de territorio:

En el mes de febrero realizamos una Minga Humanitaria para verificar las condiciones de confinamiento que viven nuestras comunidades en el resguardo Tortugaña Telembí y recuperar las víctimas de una masacre realizada por las FARC. Hoy nos encontramos enterrando a 12 hermanos más, asesinados en hechos que deben investigarse a profundidad ya que todos los indicios nos llevan a pensar que las fuerzas militares tuvieron que ver con esta masacre. En ella fue asesinada la señora Tulia García, quien había sido testigo de la muerte de su esposo, un asesinato extrajudicial cometido por el Ejército Nacional. A pesar de nuestras denuncias sobre las amenazas hacia doña Tulia, de la cual tenían conocimiento la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, nunca se hizo nada. Hoy, dos meses después, doña Tulia está muerta y con ella su testimonio. Y la acompañan en esa suerte 11 de sus familiares.³³

De esta manera, los pueblos indígenas dieron una lección a los otros grupos de víctimas y a la población excluida en Colombia: es posible aprender de sus propias tradiciones y buscar las maneras noviolentas de superar el conflicto actual. Convocando a los otros, rompieron el cerco invisible que los hacía otros entre nosotros, y abrieron la posibilidad de un nuevo nosotros, comprendido con la lógica de víctimas que quieren dejar de serlo, pero, también, que no van a dejar de serlo produciendo nuevas víctimas. Por eso, la minga tiene la capacidad de unir en la resistencia noviolenta lo que el estado de violencia y la pérdida del territorio han fragmentado, esas víctimas muchas veces anónimas de quienes luchan por la paz con las armas y sus leyes.

Esta memoria de las propias tradiciones actúa como una emergencia de una clase de solidaridad que mueve la vida de la persona implicándola con el destino de los otros. Y los motivos no son principios éticos universales abstractos, sino

la posibilidad de sobrevivir. Así, la vida presente se articula con la memoria de las vidas pasadas de personas que han fracasado en sus luchas, pero han resistido; y esa memoria activada se vuelve al mismo tiempo exigencia de un futuro mejor:

Hay que quererse y tener dignidad y exigir lo legal, y trabajar. Nosotras en el campo trabajábamos, no pedíamos. Tenemos oportunidades y [debemos] exigir la ley [...] Como trabajo con otras mujeres, veo que Dios me tiene que dar fuerza para salir adelante.³⁴
Tenemos un punto importante y es que hemos sufrido mucho, tenemos muchos problemas, y podemos hacer algo por nosotros mismos.³⁵

NOTAS

1. Este texto surge de la investigación *Hacia un método de análisis teológico (y filosófico) de la realidad social*, desarrollada por el grupo Yfantais, bajo la dirección del profesor Carlos Enrique Angarita. Esta investigación se adelantó en interlocución constante con la Diócesis de Quibdó, la Arquidiócesis de Cartagena, el Servicio Jesuita a Refugiados y el Equipo de Teología de Dimensión Educativa, y tuvo el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
2. «Hoy en día hay muchos lugares en el mundo que parecen haber caído en estos estados de violencia; por ejemplo, Palestina, Irak, Afganistán, Somalia, la República Democrática del Congo y Colombia, por nombrar unos pocos» (Dumouchel, 2008-2009: 180).
3. «Hay muchas razones para explicar por qué en nuestros medios son insurgentes y no terroristas. Insurgieron contra el orden social; aquí lo empeoraron. El resultado que nos dejaron fue más de dos millones de desplazados internamente; más de cuatro millones de colombianos viviendo en el extranjero; una Nación que en el periodo que duplicó su población vio crecer muy lentamente su economía; unas tasas de inversión que se contrajeron sustancialmente; un desempleo que se volvió explosivo. Esto no ha sido insurgencia para mejorar el orden social, sino terrorismo que ha agravado el orden social. Nosotros creemos que la guerra encuentra de parte de sus actores explicaciones. La acción violenta en Colombia no halla explicaciones.» Palabras del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la conferencia «Antiterrorismo contemporáneo: la experiencia colombiana», celebrada el 31 de marzo del 2009. Véase <<http://www.presidencia.gov.co>>.
4. «No se puede confundir la ofensa a la humanidad, que es la acción terrorista, con la defensa de la humanidad, que es la acción contra el terrorismo. Colombia hizo una defensa de la humanidad, que es una acción contra el terrorismo.» Noticia publicada por la Casa de Nariño, el 30 de junio del 2009, transcribiendo la respuesta del presidente Uribe a la pregunta de un periodista sobre la decisión de un juez ecuatoriano de ordenar la detención del ex ministro Juan Manuel Santos por el bombardeo del campamento del líder guerrillero Raúl Reyes. Véase <<http://www.presidencia.gov.co>>.
5. «El terrorismo no tiene barreras. Da la apariencia de que en un país no quiere delinquir, que allí no quiere secuestrar, pero el día que necesite hacerlo, lo hace», señaló Uribe Vélez. Agregó que «si estos terroristas sienten que pueden tener “escondidijos” en otras partes, sin que allí los combatan, entonces estos terroristas van a vivir en el proceso de aplazar y de aplazar la paz en Colombia». Noticia publicada por la Casa de Nariño, el 31 de marzo del 2009. Véase <<http://www.presidencia.gov.co>>.
6. «Mucha gente quiere hacer aparecer a muertos legítimamente en combate, [a] terroristas, guerrilleros, como ejecuciones extrajudiciales para salpicar o manchar el buen nombre de nuestras instituciones militares», manifestó el ministro de Defensa Juan Manuel Santos (*El Tiempo*, Bogotá, 05/05/09).
7. Véase <http://www.undp.org/spanish/economic_crisis/overview.shtml>, consultado el 13/09/09.
8. Véase <http://www.undp.org/spanish/economic_crisis/country_sector.shtml>, consultado el 13/09/09.
9. Véase <http://www.undp.org/spanish/economic_crisis/overview.shtml>, consultado el 13/09/09.
10. Palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez en la conferencia «Antiterrorismo contemporáneo: la experiencia colombiana». Prensa de la Casa de Nariño, 31 de marzo del 2009. Véase <<http://www.presidencia.gov.co>> (cur-siva nuestra).
11. «Soy un luchador para que Colombia prolongue la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social», dice el presidente Uribe. Noticia publicada por la Casa de Nariño, el 30 de junio del 2009. Véase <<http://www.presidencia.gov.co>>.
12. Carlos Angarita, actas de trabajo del grupo Yfantais. Las «pirámides» son formas de captación de dinero fuera del sistema financiero, con la promesa de altísimas tasas de rentabilidad. Fueron declaradas ilegales y clausuradas a finales del 2008 por el Gobierno; en la actualidad, sus dueños son acusados de lavado de activos al servicio del narcotráfico.
13. Véase <<http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=SS-1-&x=58590>>.
14. Colombia ha sido desde hace más de veinte años el escenario de una segunda «contrarreforma agraria», un proceso de expropiación violenta de las mejores tierras del país que han terminado en poder de narcotraficantes y paramilitares o, en su defecto, de sus testaferros. Un proceso promovido por una clase «emergente» que supo aprovechar la alianza de intereses entre los influyentes poderes locales y regionales, las fuerzas armadas y los narcotraficantes para dar origen al fenómeno narco-paramilitar y que sigue vivo y se adapta fácilmente a su entorno y a los cambios de una aparente modernización ratificados desde Bogotá (Quiroga, 2009).
15. Véase <<http://www.dmgrupoholdingintervenido.com>>, consultado el 20/11/09.
16. «El presidente de la empresa DMG, David Murcia, hizo un llamado al jefe de Estado Álvaro Uribe para que “se entere en qué andan sus hijos” Jerónimo y Tomás Uribe. La alusión la hizo al asegurar que el canal Body Channel, de propiedad de su empresa, produce un documental creado por uno de los hijos del Presidente.» Véase <<http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu16510-gobierno-estudia-la-posibilidad-de-intervenir-la-empresa-dmg.htm>>, 14/11/08.
17. El empresario colombiano David Murcia Guzmán, creador del consorcio DMG, intervenido por tratarse de un negocio piramidal fraudulento, aseguró haber financiado con alrededor de dos millones de pesos a los promotores de la campaña que busca la segunda reelección del presidente colombiano. Véase <<http://www.explored.com>>.

- com.ec/noticias-ecuador/dmg-habria-financiado-campana-de-alvaro-uribe-341590.html>. Germán Navas, representante del Polo Democrático Alternativo, denunció los posibles vínculos de DMG con la empresa que transportó las firmas para el referendo de reelección de Uribe. Véase <<http://www.youtube.com/watch?v=RiFGIHDeai4>>.
18. Al respecto sostiene el senador Rodrigo Lara: «A este panorama se agrega una particularidad de estos días: el control sobre los medios de comunicación. No se trata de una burda toma de canales, estilo Correa o Chávez. Consiste en la instrumentalización de herramientas administrativas, no para doblegar o confiscar medios de comunicación, pero sí para neutralizar la tentación de ciertas posiciones editoriales. Sutil y silenciosamente, el Gobierno tejió unas claras pero cuestionables mayorías en la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), de tal forma que hoy tiene la sartén por el mango a la hora de decidir si prorroga o no la licencia de los dos canales privados y será esa misma comisión la que adjudique el tercer canal. Tanto estas oprobiosas prórrogas, como la adjudicación del tercer canal, coincidirán con los tiempos decisivos de la reelección en 2009. Y esto no es un asunto de poca monta. Además de la discrecionalidad a la hora de decidir sobre el futuro de los dos canales privados —uno de ellos del mismo grupo que El Espectador—, en la licitación del tercer canal participarán los principales medios restantes. Prisa (Caracol), Planeta (El Tiempo), CMI y los principales periódicos regionales a su parte de la licitación». Véase <<http://rodrigolararestrepo.blogspot.com/2008/08/prorrogas-tercer-canal-y-reeleccion.html>>.
 19. Una de las cuatro grandes firmas encuestadoras, Datexco, tiene como socio a José Roberto Arango, exitoso empresario antioqueño, amigo de infancia de Álvaro Uribe Vélez y ex alto consejero de la Presidencia de la República. Véase <<http://www.lasillavacia.com/historia/1028>>.
 20. María Teresa Herrán se refirió a factores que atentan contra la independencia de los medios: *una especie de unanimismo uribista*, en el que «descuella más que todos la cadena televisiva RCN, aunque le sigue de cerca Caracol TV. Ambas cadenas han recibido un “mandato claro” [...] apoyar al presidente Uribe. [...] *El miedo del periodista*: Tanto lo anterior como la tradicional relación de grupos económicos y de comunicación (cadenas de televisión, RCN, Caracol —ahora vendida al grupo Prisa, lo cual implica un menor interés por la política, pero no por el *business*—, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Vanguardia, etc.) lleva, en particular en la información sobre orden público, a una total dependencia de fuentes políticas, u oficiales como el Ejército, el DAS [Departamento Administrativo de Seguridad], la Policía». Véase <<http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1703>>.
 21. Frente a la reacción del Gobierno cuando algunos medios denunciaron la corrupción en el organismo de seguridad adscrito a la Presidencia de la República, José Manuel Vivanco sostuvo: «Los periodistas tienen la obligación de cubrir estas graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del servicio de inteligencia de la Presidencia. La respuesta agresiva y descalificadora del presidente Uribe genera preocupantes dudas sobre su compromiso con el esclarecimiento de la verdad. También tiene un impacto intimidatorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión». Véase <<http://www.hrw.org/en/news/2006/04/16/uribe-debe-cesar-ataques-contra-los-medios-de-comunicacion>>.
 22. «Las actitudes de nuestro gobierno en estos eventos [reuniones de Unasur] sólo se pueden entender como una bien calculada campaña para exacerbar las contradicciones dentro del país y en la región y derivar de allí un gran respaldo popular y neutralizar las críticas de Washington a la búsqueda de un tercer mandato» (Valencia, 2009).
 23. «Estamos dispuestos a retomar la Agenda de Paz del Caguán [lugar del diálogo de paz durante el Gobierno de Pastrana], a discutir con los voceros del Estado el cambio de las injustas estructuras políticas, económicas y sociales y el fin de los privilegios. Estamos listos para asumir la discusión en torno a la organización del Estado y de la economía, y sobre los lineamientos que han de guiar al nuevo ejército que habrá de surgir de los futuros acuerdos de paz» (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2009).
 24. Carlos Angarita, actas de trabajo del grupo Yfantais.
 25. Taller con comunidad 3.
 26. Taller con comunidad 1.
 27. Valentín Mendoza, *La minga social y comunitaria de resistencia: una apelación a la solidaridad cristiana*. Material de trabajo del grupo Yfantais.
 28. Organizaciones Indígenas de Colombia, *Propuesta política y de acción de los pueblos indígenas*. Disponible en <<http://www.nasaacin.org>>, consultado el 12/06/09.
 29. *Ibidem*.
 30. Tejido de Comunicación ACIN, *Minga: el desafío de los pueblos*. Disponible en <<http://alainet.org>>, consultado el 12/06/09.
 31. Tejido de Comunicaciones y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, *¿Qué moviliza a los indígenas? Un asunto de vida o muerte*, Santander de Quilichao, 17/04/09. Disponible en <<http://www.viva.org>>, consultado el 24/05/09.
 32. Taller con comunidad 1.
 33. Carta de Camawari al presidente Uribe Vélez. Ricaurte, Nariño, 28 de agosto del 2009. Véase <<http://www.prensaindigena.org.mx/nuevositio/?p=14311>>.
 34. Taller con comunidad 3.
 35. Taller con comunidad 1.

BIBLIOGRAFÍA

- AFRODES (AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS) (2009): *Marco referencial en juventud e infancia de la población afrodescendiente*. Documento de trabajo, Bogotá.
- ANGULO, S. J., Alejandro, Valentina ZARAMA, William ROZO y Alejandro BURGOS (2009): «¿En qué está la Paz? Cifras del conflicto armado», *Cien Días vistos por CINEP*, 66. Disponible en <<http://www.cinep.org.co/node/673>>.
- CELIS, Luis Eduardo (2009): *Dossier: dinámicas de la confrontación Gobierno-Farc. 11 de mayo-28 de junio de 2009*, Bogotá, Corporación Arco Iris.
- CEPAL (COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE) (2008): *Situación y desafíos de la juventud en Iberoamérica*, San Salvador, CEPAL.

- DUMOUCHEL, Paul (2008-2009): «Inside Out: Political Violence in the Age of Globalization», *Contagion. Journal of Violence, Mimesis, and Culture*, 15/16.
- DURÁN, Angélica (2007): *El crimen organizado, el estado y la democracia. Los casos de América Central y el Caribe*, Madrid, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Disponible en <<http://www.fride.org>>.
- ESCOLA DE CULTURA DE PAU (2009): *Barómetro 19 sobre conflictos y construcción de paz*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona.
- FISAS, Vicenç (2009): *Anuario 2009 sobre procesos de paz*, Barcelona, Icaria/Escola de Cultura de Pau.
- GALVIS, Germán [guerrillero del Frente Antonio Nariño, Bloque Oriental de las FARC-EP] (2009): «Contra la “seguridad democrática”: guerra de todo el pueblo», 17/05/09. Disponible en <<http://comunicadomb.blogspot.com/2009/05/contra-la-seguridad-democratica-guerra.html>>, tomado de <<http://www.freuntean.col.nu>>.
- GARCÍA, S. J., Mauricio (2009): «Siete años del Presidente Uribe. ¿Qué balance podemos hacer?», *Cien Días vistos por CINEP*, 67. Disponible en <<http://www.cinep.org.co/node/732>>.
- GONZÁLEZ, S. J., Fernán (1999): *Colombia: una nación fragmentada*, Bilbao, Bakeaz (Cuadernos Bakeaz, 36).
- GUERRERO, Luis Guillermo (2009): «De ganar la guerra a construir la paz», *Cien Días vistos por CINEP*, 66. Disponible en <<http://www.cinep.org.co/node/678>>.
- HAMERTON-KELLY, Robert (2007): «An Introductory Essay», en Robert HAMERTON-KELLY (ed.): *Politics and Apocalypse*, East Lansing (Michigan), Michigan State University Press, 1-28.
- HEGEL, Georg W. F. (1993): *Fundamentos de la Filosofía del Derecho*, Madrid, Libertarias/Prodhufi.
- INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2009): *Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: jugar la carta correcta*, Bogotá y Bruselas, International Crisis Group.
- KRUIJT, Dirk, y Kees KOONINGS (2008): *Colombia, Estado paradójico*, Madrid, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Disponible en <<http://www.fride.org>>.
- LANDMINE MONITOR (2009): *Landmine Monitor Report 2009. Toward a Mine-Free World*, Ottawa, Mines Action Canada.
- NAVARRETE, Lorenzo (2006): *Jóvenes, derechos y ciudadanía*, Madrid, Injuve. Disponible en <<http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=478929051&menuId=2104203924>, 6>.
- PALAUER, Wolfgang (2007): «Carl Schmitt's “Apocalyptic” resistance against Global Civil War», en Robert HAMERTON-KELLY (ed.): *Politics and Apocalypse*, East Lansing (Michigan), Michigan State University Press, 69-94.
- QUIROGA, Diego (2009): «La difícil despolitización del conflicto armado colombiano», *Cien Días vistos por CINEP*, 67. Disponible en <<http://www.cinep.org.co/node/728>>.
- SARMIENTO, Libardo (2004): *Política pública de juventud en Colombia. Logros, dificultades y perspectivas*, Medellín, Colombia Joven/GTZ.
- SCHMITT, Carl (1932): *El concepto de lo político*. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios de Carl Schmitt. Disponible en <http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/CarlSchmitt/CarlSchmitt_ElConceptoDeLoPolitico.htm>.
- SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP (2008): *Carta de las FARC a Colombianos por la Paz*, Montañas de Colombia, 17/12/08. Disponible en <<http://www.colombianosporlapaz.com>>.
- (2009): *Carta abierta de las FARC a UNASUR, y los países del ALBA*, Montañas de Colombia, 02/09/09. Disponible en <<http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?31752>>.
- SOLARTE, Roberto (1999): «Núcleos éticos de las culturas y globalización», en Fabio LÓPEZ (ed.): *Globalización, incertidumbres y posibilidades. Política, comunicación y cultura*, Bogotá, Tercer Mundo Editores/IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, 211-235.
- VALENCIA, León (2009): «La gran estrategia de Uribe en Unasur», *El Tiempo*, 18/09/09, <http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/lvalencia/la-gran-estrategia-de-uribe-en-unasur_6144727-1>
- VIRTUOSO, S. J., José (coord.) (2008): *América Latina al terminar el 2008. Desafíos para el 2009*, Caracas, Centro Gumilla.



Algunas publicaciones de Bakeaz

Universales del odio. Creencias, emociones y violencia, Martín Alonso
Bilbao, Bakeaz, 2004, 168 pp., 12,00 euros. Ref.: SG13

El final del siglo ha sido testigo del retorno de las ideas fuertes, aquellas que invocan quienes se prestan a matar y a morir. Fundamentalismos, nacionalismos, radicalismos de contenido étnico o religioso, así como fanatismos de la identidad y la pertenencia, han dado al traste con la euforia generada por el final de la Guerra Fría. La confrontación de escenarios que han conocido episodios de intensa virulencia revela notables analogías. Las similitudes son visibles tanto en el plano de la retórica —las justificaciones para actuar— como en el de la acción —la secuencia que conduce desde las formulaciones legitimadoras hasta las prácticas agresivas—.

La retórica incorpora las creencias que definen la realidad. Por esta razón, la elaboración conceptual comienza con la postulación de una causa como fundamento ontológico. El segundo paso consiste en la definición del problema desde los parámetros de la causa: es la manufactura del enemigo. La solución —la neutralización del enemigo— cierra el proceso. En cuanto a la secuencia de la acción colectiva, las creencias activan estados emocionales que, a una determinada intensidad y en un contexto apropiado (las ideas remiten a la realidad social), desembocan en conductas agresivas organizadas. Dado que la violencia suscita resistencias sociales y psicológicas, tanto las racionalizaciones como las emociones deben suministrar a ejecutores y simpatizantes, junto con estímulos para la acción, mecanismos para cauterizar la conciencia ética. La primera parte del libro aborda la tarea desde un plano general, mientras que la segunda se circunscribe al etnorradicalismo vasco.

Martín Alonso Zarza es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, en Filosofía y en Psicología; es profesor de instituto. Sus intereses y sus publicaciones versan sobre el pensamiento político de Rousseau, los nacionalismos, los usos de la Historia, la violencia política y los conflictos de los Balcanes. Es autor del libro *Universales del odio. Creencias, emociones y violencia* (Bilbao, Bakeaz, 2004) y de los Cuadernos Bakeaz *Bosnia, la agonía de una esperanza* (Bilbao, Bakeaz, 1995), *Universales del odio: resortes intelectuales del fanatismo y la barbarie* (Bilbao, Bakeaz, 2000) y *Relatos exclusivos, políticas excluyentes. El patrón de Oriente Próximo* (Bilbao, Bakeaz, 2006).



Educar para la paz en tiempos difíciles, Xesús R. Jares
Bilbao, Bakeaz, 2004, 144 pp., 10,00 euros. Ref.: SG14

Este libro recoge los trabajos del autor publicados por Bakeaz. Los cuatro estudios aquí reunidos presentan de forma clara y sintetizada los núcleos teóricos y los ámbitos de actuación fundamentales de la educación para la paz. Así, en el primero de ellos se exponen sus bases teóricas, contextualización histórica, componentes e implicaciones educativas. El segundo analiza la relación entre educación y derechos humanos, y expone los principios de un proyecto educativo desde y para los derechos humanos. El tercero constituye el primer trabajo educativo que se ha hecho en España en relación con las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. El tiempo transcurrido desde entonces y los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid no han hecho más que corroborar lo que allí se decía, al mismo tiempo que se hace más necesaria la puesta en práctica de las propuestas educativas que contiene. Finalmente, en el último estudio se aborda el tema central de la educación para la paz, como es la relación entre conflicto y convivencia, ligado, además, al tema clave de la formación del profesorado.

Xesús R. Jares falleció el 27 de septiembre del 2008. En palabras de Manuel Area Moreira, profesor de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna (España), «Xesús R. Jares fue un intelectual comprometido con la construcción de un pensamiento sociocrítico sobre la educación de la ciudadanía del siglo XXI. Sus reflexiones y aportaciones sobre educar para una sociedad más democrática, justa y solidaria son de interés para toda la comunidad latinoamericana de educadores». Era un docente y pedagogo comprometido con el cambio, la mejora y la innovación de la educación como una necesidad básica para construir una sociedad democrática. Era catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de A Coruña.

Dinámicas de la memoria y víctimas del terrorismo, Xabier Etxeberria
Bilbao, Bakeaz, 2007, 112 pp., 8,00 euros. Ref.: SG17

El derecho a un buen *trabajo de la memoria* de las victimizaciones sufridas, tanto en sus dimensiones subjetivas como públicas, es un derecho decisivo para las víctimas. Con este estudio se pretende colaborar en la realización del mismo. Para ello se ofrece un análisis de las dinámicas de la memoria —en su dimensión individual y social— que se focaliza en la experiencia de victimización, para aplicarlo luego de modo específico a las víctimas del terrorismo que desgraciadamente se ha desarrollado entre nosotros: el terrorismo de ETA en especial y también las iniciativas contraterroristas frente a él no acordes con los derechos humanos.

Se estructura el libro en tres capítulos. En el primero se tratan las cuestiones generales en torno a la memoria subjetiva consideradas pertinentes para los objetivos marcados. En el segundo se resalta todo lo relacionado con la dimensión pública de la memoria, en buena medida objetivada en diversos *productos*. El tercero se centra en los deberes de memoria en sus usos públicos. Siempre, como se acaba de indicar, derivando las diversas consideraciones que van surgiendo al caso de las víctimas del terrorismo.

Xabier Etxeberria Mauleon es catedrático de Ética en la Universidad de Deusto (Bilbao) y miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la misma universidad. Es responsable del Área de Educación para la paz de Bakeaz. Profesor visitante de diversas universidades en América Latina, donde colabora habitualmente con organizaciones indígenas y de derechos humanos, centra su investigación filosófica en los campos de la ética fundamental, la ética profesional y la ética política (especialmente en torno a las identidades colectivas), así como en la vertiente ética de los derechos humanos. En torno a ellos ha publicado numerosos artículos, cuadernos y libros, entre los que cabe citar los siguientes: «*Lo humano irreductible*» de *los derechos humanos* (Bakeaz), *Temas básicos de ética* (DDB), *La educación para la paz ante la violencia de ETA* (Bakeaz), y las contribuciones a los libros *Conflictos, violencia y diálogo. El caso vasco* (UD), y *La presencia de las víctimas del terrorismo en la educación para la paz en el País Vasco* (Bakeaz).



Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas, John Paul Lederach
 Bilbao, Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 1998, 200 pp., 14,00 euros. Ref.: RG02

Para construir las paces hacen falta al menos tres cosas: voluntad, herramientas y proyecto. En los últimos años se han ideado algunas herramientas nuevas y se han recuperado otras viejas y olvidadas de tratamiento, transformación y resolución de conflictos.

John Paul Lederach ha hecho varias contribuciones importantes en este sentido. La de este libro es bien especial, porque no trata de presentar varias herramientas más, sino de plantear con palabras sencillas un marco de construcción de la paz dentro del cual encuadrar en un proyecto todas las herramientas que conocemos y las personas que han de manejarlas.

Aunque los planteamientos de este texto sean aún primerizos, pueden ya medirse con otras grandes teorías, por ejemplo, el marxismo. Ese contraste es de enorme interés. Frente a la dialéctica negativa con insistencia en la violencia, «la partera de la historia», que impregna el marxismo, este texto plantea la reconciliación como espacio de encuentro, *locus*, y elemento orientador, *focus*. Mientras que el marxismo resalta la importancia de las bases sociales y del poder institucional, el nivel bajo y el alto, John Paul Lederach resalta el poder del nivel intermedio, un poder basado en las relaciones y contactos, mediador, no coactivo. Un poder que olvidó el marxismo y que no entienden aún la mayoría de los políticos de hoy.



La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz, John Paul Lederach
 Bilbao, Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 2007, 272 pp., 17,00 euros. Ref.: RG09

En este libro, el autor plantea la siguiente pregunta: «¿Cómo trascendemos los ciclos de violencia que subyugan a nuestra comunidad humana cuando aún estamos viviendo en ellos?». La construcción de la paz, en su opinión, es tanto una técnica aprendida como un arte. Para encontrar este arte se hace necesario un cambio en la cosmovisión. Los profesionales de la resolución de conflictos han de imaginar su trabajo como un acto creativo, haciendo un ejercicio de lo que Lederach denomina «imaginación moral». Esta imaginación, sin embargo, debe surgir de —y hablar a— las duras realidades de los asuntos humanos. Hay que tener un pie en lo que es y un pie más allá de lo que existe. El libro está organizado a partir de cuatro historias que apuntan a la imaginación moral pero que están incompletas. Lederach pretende entender qué pasó en estos casos particulares y de qué manera son relevantes para un cambio a gran escala.

Como la mayoría de los profesionales de la construcción de la paz, Lederach percibe su trabajo como una vocación religiosa. Reflexiona acerca de su propia llamada y sobre la espiritualidad que mueve a la gente corriente para rechazar la violencia y perseguir la reconciliación.

John Paul Lederach es uno de los más destacados expertos en construcción de la paz y reconciliación. Es profesor de Construcción Internacional de la Paz en el Instituto de Estudios Internacionales de la Paz Joan B. Kroc, de la Universidad de Notre Dame, y académico distinguido en el Programa de Transformación de Conflictos de la Universidad Menonita del Este. También lleva a cabo trabajos prácticos de tratamiento y transformación de conflictos, en lugares como Nicaragua, Somalia, Irlanda del Norte, Tayikistán y Filipinas. Su libro *Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas* (Bilbao, Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 1998) se ha convertido en un clásico de la disciplina.

Boletín de pedido

Apellidos _____
 Nombre _____ NIF/CIF _____
 Domicilio _____
 Población _____ CP _____ Provincia _____
 Teléfono _____ Fax _____ Correo electrónico _____

Deseo recibir las siguientes publicaciones de Bakeaz

Referencia	Título	N.º ejcs.	Importe
Gastos de envío			4,00 euros
Total			euros

Forma de pago: contra reembolso.

Mario Roberto Solarte, *Colombia: simetrías violentas y alternativas que emergen de la memoria*, Cuadernos Bakeaz, n.º 92.
© Mario Roberto Solarte Rodríguez, 2009; © Bakeaz, 2009.

Las opiniones expresadas en estos trabajos no coinciden necesariamente con las de Bakeaz.

Cuadernos Bakeaz es una publicación monográfica, bimestral, realizada por personas vinculadas a nuestro centro o colaboradores del mismo. Aborda temas relativos a economía de la defensa, políticas de cooperación, educación para la paz, geopolítica, movimientos sociales, economía y ecología; e intenta proporcionar a aquellas personas u organizaciones interesadas en estas cuestiones, estudios breves y rigurosos elaborados desde el pensamiento crítico y desde el compromiso con esos problemas.

Director de la publicación: Josu Ugarte • **Coordinación técnica:** Blanca Pérez • **Consejo asesor:** Martín Alonso, Joaquín Arriola, Nicolau Barceló, Anna Bastida, Roberto Bermejo, Jesús Casquete, Xabier Etxeberria, Adolfo Fernández Marugán, Carlos Gómez Gil, Rafael Grasa, Xesús R. Jares, José Carlos Lechado, Arcadi Oliveres, Jesús M.ª Puente, Jorge Riechmann, Juan Manuel Ruiz, Pedro Sáez, Antonio Santamaría, Angela da Silva, Ruth Stanley, Carlos Taibo, Fernando Urruticoechea • **Últimos títulos publicados:** 36. Fernán González, S.I., *Colombia, una nación fragmentada*; 37. Xabier Etxeberria, *La noviolencia en el ámbito educativo*; 38. Antoni Segura i Mas, *El Sáhara en la dinámica política magrebí y las dificultades del Plan de Paz (1995-2000)*; 39. Dieter Rucht, *El impacto de los movimientos medioambientales en Occidente*; 40. Martín Alonso, *Universales del odio: resortes intelectuales del fanatismo y la barbarie*; 41. Tica Font (coord.), *La paz en movimiento: campañas y experiencias de movilización (I)*; 42. Tica Font (coord.), *La paz en movimiento: campañas y experiencias de movilización (II)*; 43. Julián Salas, *Hábitat y cooperación en Latinoamérica. Centroamérica antes y después del 'Mitch'*; 44. Roberto Bermejo, *Fundamentos de ecología industrial*; 45. Gema Celorio, *Nuevos retos para la sensibilización sobre el desarrollo*; 46. Carlos Gómez Gil, *La cooperación descentralizada en España: ¿motor de cambio o espacio de incertidumbre?*; 47. Xabier Etxeberria, *Ignacio Ellacuría: testimonio y mensaje*; 48. Juan Manuel Ruiz, *En torno a la eficiencia*; 49. Xesús R. Jares, *Educación para la paz después del 11/09/01*; 50. Gabriel Pons, *Herramientas de las ONGD en la cooperación para el desarrollo económico*; 51. Roberto Bermejo, *Concepciones de la sostenibilidad y sistemas de indicadores*; 52. Julián Salas, *Introducción a la práctica de la evaluación de proyectos de cooperación*; 53. Joaquim Sempere, *Necesidades, desigualdades y sostenibilidad ecológica*; 54. Johan Galtung, *Conflicto, guerra y paz, a vista de pájaro. Y cómo los aborda el grueso de los políticos y periodistas*; 55. Jesús Casquete, *Movimientos sociales y democracia*; 56. Manuel Jiménez, *Sumando esfuerzos. Tendencias organizativas en el movimiento ecologista en España durante los noventa*; 57. Joaquín Arriola Palomares, *¿La globalización? ¡El poder!*; 58. Ignacio Álvarez-Ossorio, *Claves sobre el conflicto palestino-israelí*; 59. Miguel Márquez, Luis Suárez y Cándido López, *Cuba y el desarrollo humano sostenible*; 60. Mario Roberto Morales, *Guatemala: autoritarismo e interculturalidad*; 61. Carmen Magallón, *Las mujeres como sujeto colectivo de construcción de paz*; 62. Carlos Taibo, *Los conflictos bélicos en el umbral del siglo XXI*; 63. Roberto Bermejo, *Análisis de la rentabilidad del proyecto de la 'Y' vasca y bases para una estrategia ferroviaria alternativa*; 64. José Carlos Sendín Gutiérrez (coord.), *África: entre la percepción externa y el proyecto emancipador*; 65. Carlos Gómez Gil, *Las ONG en la sociedad global. Estrategias de las ONG frente al Estado en la era de la globalización*; 66. Lara González Gómez y Clara Murguialday Martínez, *Evaluar con enfoque de género*; 67. Mireia Espiau, Dominique Saillard y Rafael Ajangiz, *Género en la participación. Un camino por recorrer*; 68. Antxon Gallego, Manuel Fernández y Efrén Feliu, *Criterios generales para la planificación de procesos participativos*; 69. Roberto Bermejo, David Hoyos y David Guillamón, *Análisis socioeconómico del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020*; 70. Roberto Bermejo, *Del fin de la era del petróleo a la economía solar*; 71. Gabriel Pons, *Políticas agrarias y cooperación*; 72. Carlos Gómez Gil, *Nuevas vías para el codesarrollo en la cooperación descentralizada*; 73. Ignacio Álvarez-Ossorio, *El mundo árabe: entre la tradición y la modernidad*; 74. Martín Alonso, *Relatos exclusivos, políticas excluyentes. El patrón de Oriente Próximo*; 75. Iñaki Gorozpe, *Guinea Ecuatorial: crecimiento sin desarrollo*; 76. Carlos Gómez Gil, *El dilema de los microcréditos en las políticas de desarrollo*; 77. Sophie Caratini, *La prisión del tiempo: los cambios sociales en los campamentos de refugiados saharauis*; 78. Jorge Riechmann, *Monetización de los impactos del cambio climático: problemas y debates*; 79. Joaquim Sempere, Mercedes Martínez y Ernest Garcia, *Ciencia, movimientos ciudadanos y conflictos socioecológicos*; 80. Martín Alonso, *¿Sifones o vasos comunicantes? La problemática empresa de negar legitimidad a la violencia desde la aserción del «conflicto» vasco*; 81. Jesús Casquete, *Agitando emociones. La apoteosis del héroe-mártir en el nacionalismo vasco radical*; 82. Aleksis Ylonen, Mayra Moro Coco y Juan Álvarez Cobelas, *Costa de Marfil: entre la violencia y el desarrollo*; 83. Carlos Gómez Gil, *Los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la cooperación descentralizada*; 84. Ana Izquierdo Lejardi y Laura Rodríguez Zugasti, *El comercio justo como herramienta de consumo responsable*; 85. Florent Marcellesi, *Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde*; 86. Efrén Areskurrinaga, *La liberalización agrícola y el aumento de la inseguridad alimentaria mundial*; 87. Andrés Cabanas, *La encrucijada de Guatemala: regresión autoritaria o democracia participativa*; 88. Florent Marcellesi e Igone Palacios, *Integración de consideraciones de sostenibilidad en la cooperación para el desarrollo*; 89. Carlos Gómez Gil, *Una visión panorámica de la cooperación descentralizada de las entidades locales*; 90. Xabier Etxeberria, *Referentes éticos ante la expansión empresarial en el Sur*; 91. Ignacio Álvarez-Ossorio Alvarino, *La situación humanitaria de Gaza*; 92. Mario Roberto Solarte, *Colombia: simetrías violentas y alternativas que emergen de la memoria* • **Diseño:** Jesús M.ª Juaristi • **Maquetación:** Mercedes Esteban Meriel • **Impresión:** Grafilur • **ISSN:** 1133-9101 • **Depósito legal:** BI-295-94.

Suscripción anual (6 números): 24,00 euros • **Forma de pago:** domiciliación bancaria (indique los 20 dígitos correspondientes a entidad bancaria, sucursal, control y c/c.), o transferencia a la c/c. 2095/0365/49/3830626218, de Bilbao Bizkaia Kutxa • **Adquisición de ejemplares sueltos:** estos cuadernos, y otras publicaciones de Bakeaz, se pueden solicitar contra reembolso (4,00 euros de gastos de envío) a la dirección abajo reseñada. Su PVP es de 4,00 euros por ejemplar.

Bakeaz es una organización no gubernamental fundada en 1992 y dedicada a la investigación. Creada por personas vinculadas a la universidad y al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y el medio ambiente, intenta proporcionar criterios para la reflexión y la acción cívica sobre cuestiones relativas a la militarización de las relaciones internacionales, las políticas de seguridad, la producción y el comercio de armas, la relación teórica entre economía y ecología, las políticas hidrológicas y de gestión del agua, los procesos de Agenda 21 Local, las políticas de cooperación o la educación para la paz y los derechos humanos. Para el desarrollo de su actividad cuenta con una biblioteca especializada; realiza estudios e investigaciones con el concurso de una amplia red de expertos; publica en diversas colecciones de libros y boletines teóricos sus propias investigaciones o las de organizaciones internacionales como el Worldwatch Institute, ICLEI o UNESCO; organiza cursos, seminarios y ciclos de conferencias; asesora a organizaciones, instituciones y medios de comunicación; publica artículos en prensa y revistas teóricas; y participa en seminarios y congresos.